

Elecciones en Guatemala 2023: entre el poder y la impunidad

#ELECCIONES2023



Elecciones en Guatemala 2023: entre el poder y la impunidad

Junio 2023

Autores

Steven Dudley – Director del proyecto

Alex Papadovassilakis – Gerente del proyecto

Edgar Gutiérrez – Investigador

Jody García – Investigador

Diagramación y diseño:

Ana Isabel Rico, Juan José Restrepo, María Isabel Gaviria – Diseño gráfico

Elisa Roldán – Dirección creativa

Proceso editorial:

Peter Appleby – Editor

Sean Doherty, Christopher Newton, Henry Shuldiner, Gavin Voss –
Verificación de hecho



Contents

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Executive Summary | 5 |
| 2 | Major Findings | 7 |
| 3 | Background | 16 |
| 4 | Bloc I: Vamos - The Fight to Stay in the Game | 26 |
| | Executive Power, Congress, and Mayors | 26 |
| | <i>How the Executive Branch Divvies up the Pie</i> | 27 |
| | <i>Congressional Quid Pro Quo</i> | 28 |
| | <i>Path to Power: Old Mayors, New Allies</i> | 30 |
| | Denying Justice, Destroying Enemies | 32 |
| | <i>An Unholy Alliance: The President and the Attorney</i> | |
| | <i>General's Office</i> | 32 |
| | <i>Stacking the High Courts: Part I</i> | 37 |
| 5 | Bloc II: UNE's One-Pronged Strategy | 39 |
| | The UNE's Congressional Carrousel | 39 |
| | <i>Congressional Powerbrokers</i> | 40 |
| | <i>Controlling the Ports</i> | 40 |
| | <i>Caciques, Elites, and Evangelical Churches</i> | 43 |
| | Judicial Protection and Political Survival | 44 |
| | <i>Trading Favors: The Courts, Attorney General's Office,</i> | |
| | <i>and Congress</i> | 44 |
| | <i>TSE: Getting on the Ballot</i> | 46 |
| 6 | Bloc III - Valor and the Ghost of the CIACS | 48 |
| | Three Pillars | 48 |
| | <i>Pillar I: The Old Guard</i> | 49 |
| | <i>Pillar II: Unionistas</i> | 50 |
| | <i>Pillar III: FCN-Nación</i> | 53 |

| | | |
|----------|---|----|
| | Political Power, Impunity, and Judicial Vengeance | 54 |
| | <i>Swaying the Postulation Commissions</i> | 54 |
| | <i>Stacking the High Courts: Part II</i> | 55 |
| | <i>Seeking Vengeance From the Outside In</i> | 58 |
| 7 | Bloc IV - Cabal: Caciques and Compromises | 60 |
| | The Candidate..... | 60 |
| | A Fragile Coalition and Lots of Red Flags..... | 62 |
| 8 | Case Study: Citizen Prosperity - Wild Card Meets | |
| | Status Quo | 65 |
| | Carlos Pineda: A Wild Card..... | 66 |
| | Wild Card Meets Status Quo..... | 69 |
| 9 | Methodology | 71 |
| | Related Content | 73 |

1

Resumen Ejecutivo

Este informe traza la evolución del crimen organizado en Guatemala con especial énfasis en la penetración de los sistemas político y judicial en un momento en que el país se dará cita en las urnas para las elecciones generales el 25 junio de 2023. Con este fin, ofrece un contexto histórico y actual de las dinámicas del crimen organizado en el país centroamericano, además de descripciones detalladas de los cuatro bloques de poder político más destacados del país: **Vamos**, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), **Valor** y **Cabal**.

Estos bloques políticos derivan su poder de sus cargos en la actual administración o en gobiernos anteriores, además de que se benefician de empresas legalmente registradas y en ocasiones de fuentes de capital ilícito. La descripción de dichos bloques no es de ninguna manera exhaustiva, como no estos son monolíticos ni jerárquicos, sino más bien, coaliciones que incluyen diversos partidos satélite.

Los hemos seleccionado porque sus actividades ilustran **dinámicas de poder** más amplias en los sectores político y judicial, y porque son los principales operadores políticos de Guatemala. Los bloques también tienen muchas posibilidades de retener influencia importante o de ganarla por la vía de las elecciones, lo cual ilustra lo factible que es la repetición de dichos patrones. El control sobre los entes del Estado también permite a estos grupos socavar el proceso electoral eliminando candidatos que amenacen el statu quo. El ejemplo más destacado de esto es la candidatura de Carlos Pineda Sosa, de Prosperidad Ciudadana (PC), quien es el objeto de nuestro estudio de caso. Pero otros candidatos también han sido excluidos por el establecimiento.

A estos bloques los apoyan diversos tipos de **élites corruptas y criminales**, algunas de las cuales anteceden las actuales configuraciones políticas que se imponen en las encuestas y la mayoría de las cuales se unieron en torno a una causa común en los últimos años: revertir los procesos judiciales y las reformas legales iniciadas por el organismo judicial supranacional conocido como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Estas élites **ejercen** un enorme capital económico, político y social como mecanismo para consolidar y ampliar sus intereses, debilitando a sus rivales y garantizando la impunidad.

Pueden formar o apoyar a cualquiera de los cuatro bloques políticos mencionados, si sienten que va en pro de sus intereses. O pueden no hacerlo y optar por formar una alianza o bloque político aparte que puedan dominar.

Estos bloques de poder político, junto con esas élites, han creado **un sistema** mediante el cual pueden seguir controlando y ampliando sus intereses y garantizando la impunidad cada cual por su lado. Esto lo hacen buscando acceso a lo que equivale a un carrusel de poder. Cada quien paga por jugar, luego participa en acuerdos de mutuo beneficio con una o varias partes del gobierno y los partidos políticos que lo controlan. Parte de ello es la promesa explícita e implícita de financiar sus campañas y no tomar parte activa en medidas que debiliten su poder político. El sistema se perpetúa, en parte, por la fragmentación de la política en el país, que impide el poder absoluto a ningún partido o caudillo.

La impunidad también se blinda por consenso. Esos bloques han creado un monopolio virtual sobre las instituciones que regulan la vida política y económica y sobre los entes que vigilan la actividad ilícita. La influencia del sistema judicial comienza específicamente con la selección de comisiones especiales infiltradas por mafias políticas y, al servicio de redes de corrupción, eligen candidatos sin las calificaciones adecuadas o con dudosos prontuarios en los más altos cargos judiciales y regulatorios. Una vez en el poder, esos funcionarios judiciales y regulatorios sirven a los intereses corruptos. Archivan o no investigan las mafias políticas. Persiguen a enemigos u opositores, anulan sentencias contra aliados y amigos y ponen aliados en cargos claves para reforzar el statu quo y satisfacer los deseos de sus patrones.

2

Principales hallazgos

1. Hay cuatro bloques de poder político sobre los que hay que estar atento en estas elecciones, todos los cuales tienen conexiones con poderosos intereses criminales y corruptos.

El primer bloque, **Vamos**, gira en torno al partido político del presidente en ejercicio **Alejandro Giammattei** (2020-actualidad). El presidente —con ayuda de su director del centro de gobierno, Miguel Martínez, y sus aliados— ha gobernado en un periodo sacudido por la divulgación de numerosos escándalos de corrupción. Sin embargo, la administración se ha mantenido relativamente indemne. Esto se debe, en parte, a la alineación cercana sin precedentes entre las ramas del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La alineación de estos tres poderes ha transformado al sector judicial en un instrumento que blindo esquemas de corrupción y persigue a opositores políticos. El bloque de Giammattei se ha convertido en el nodo central de esta alianza, surgida del interés común de revertir los avances en el sector judicial de la última década, logrados bajo la tutela de la CICIG, el ente judicial mencionado y avalado por las Naciones Unidas.

El segundo bloque, **UNE**, se centra en uno de los partidos políticos más resilientes del país, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), encabezada por la candidata presidencial reincidente y ex primera dama, **Sandra Torres**. El partido de Torres lleva más de una década sin acceder al poder, pero mantiene una coalición consistentemente numerosa en el Congreso. Esto le permite al bloque cambiar votos por acceso a lucrativos recursos estatales, controlar importantes instituciones gubernamentales y gozar de protección legal. Al igual que muchos partidos, la avidez de UNE por el botín gubernamental lo ha arrastrado a la órbita del establecimiento —hay información sobre un pacto entre Torres y Giammattei— lo que reduce la oposición al statu quo.

El tercer bloque, **Valor**, está encabezado por la que fuera en una ocasión la favorita a la presidencia, **Zury Ríos**, hija de un infame dictador militar. El bloque se centra en una alianza política entre dos partidos: Valor y el Partido Unionista, cuyo variopinto colectivo reúne a militares de extrema derecha, élites del sector privado y líderes religiosos. Estos actores apuntalan su influencia en la política, los negocios y el crimen organizado para socavar las instituciones del Estado y facilitar sus actividades lícitas e ilícitas. Entre los seguidores que más se hacen sentir hay una entidad paralegal conocida como la Fundación contra el Terrorismo (FCT). La FCT está liderando los esfuerzos por desestabilizar el sector judicial con la persecución de los fiscales, jueces, activistas sociales y periodistas que antes encabezaron la lucha contra la impunidad.

El cuarto bloque, **Cabal**, gira en torno a un partido de reciente formación, dirigido por el candidato presidencial por segunda vez, **Edmond Mulet**. Político de carrera y diplomático, Mulet se presenta como alguien de afuera y cruzado contra la corrupción, pero cualquier ambición de separarse del statu quo puede verse en riesgo por los numerosos personajes cuestionables que componen las filas de su partido. Entre ellos se cuentan candidatos a alcaldías y al Congreso con partidos políticos implicados en grandes entramados de corrupción. Muchos de los mismos candidatos han enfrentado acusaciones de corrupción y otros delitos. Si Mulet triunfara en las elecciones, casi sin duda tendría que negociar con las demás facciones mencionadas en este informe para tener cualquier tipo de influencia en el Congreso y la rama judicial.

Si bien estos bloques defienden diversos intereses y compiten por acceso a los recursos del Estado y por favores judiciales, también hacen parte de una alianza más amplia que engloba a varios partidos e instituciones, unidas para perpetuar la corrupción. Llamada con frecuencia con el eufemístico nombre de Pacto de Corruptos, no se trata de un pacto formal. Pero todos se han beneficiado de la atmósfera de impunidad y, sin importar el resultado de la elección, lo más seguro es que sigan trabajando en conjunto para evitar cualquier alteración del estado de cosas.

Pocas cosas ilustran mejor esto que los feroces esfuerzos del establecimiento por expulsar de las elecciones a candidatos indeseados valiéndose del sistema de cortes, por ende garantizando que el poder permanezca dentro del pacto. Esto se explora en un estudio de caso sobre el candidato presidencial Carlos Pineda Sosa, un actor no alineado cuyo ascenso a la cabeza de las encuestas amenazó con arrebatarse la influencia al actual orden. Un tribunal menor suspendió su candidatura y la del partido político que adoptó. Los intentos de Pineda por apelar la decisión fueron desestimados por las altas cortes, que están influenciadas por los principales bloques políticos.

2. Hay cinco principales bloques corruptos y criminales que trabajan en concierto con los mayores movimientos y coaliciones políticas.

Los bloques políticos antes descritos albergan diferentes tipos de élites en competencia, algunos que se remontan a la guerra civil del país (1960-1996), que compiten por mayor influencia sobre altos políticos y funcionarios judiciales para garantizar sus intereses comerciales lícitos e ilícitos. Hemos identificado a cinco. Tres de estos operan a la luz pública, promoviendo sus intereses mediante instituciones gubernamentales, leyes y regulaciones que les permitan actuar en concierto relativo con los entes judiciales y regulatorios del país. Dos operan de manera más clandestina, ignorando, cooptando o subvirtiendo los entes judiciales y regulatorios en su búsqueda de poder y capital económico.

En la esfera pública están las **élites económicas tradicionales** —algunas familias que hacen uso de la empresa y el capital para evitar el escrutinio y ejercer influencia política en beneficio de sus intereses económicos y el debilitamiento o destrucción de la competencia. Varias **coaliciones políticas en el congreso y las regiones** son alianzas multipartidistas entre políticos de mediano nivel en el Congreso y en los concejos municipales que cambian votos por acceso a contratos del Estado y otras recompensas del gobierno. Con frecuencia incluyen a tecnócratas y burócratas bien posicionados. Algunas **élites emergentes** también han hecho uso de su acceso al poder político para establecer y controlar lucrativas empresas en campos menos tradicionales, como la industria farmacéutica, la construcción o las telecomunicaciones, gran parte de las cuales son financiadas o subsidiadas por el gobierno. También difieren de las élites tradicionales que participan de manera más abierta en el proceso político.

En un ámbito más clandestino están los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (**CIACS**). Los CIACS son redes de generales del ejército y agentes de inteligencia formadas durante la guerra civil que han penetrado altos cargos para favorecer la impunidad por sus crímenes de guerra y la actividad criminal, incluido el narcotráfico y el contrabando. Con el tiempo, han extendido sus intereses económicos a la seguridad privada y otras industrias. Los CIACS también se usan cada vez más para describir diversos intereses criminales que se extienden a un amplio espectro de contextos pero permanecen incrustados en el Estado y usan el gobierno para favorecer sus intereses.

Finalmente, están las organizaciones narcotraficantes (**ONT**) que se aprovechan del poder político y económico para ejercer influencia sobre el Congreso y las alcaldías. Esto les permite asegurar contratos con el gobierno para blanquear ganancias ilícitas y gozar de protección judicial.

| | |
|--|---|
| <p>Élites económicas tradicionales</p> | <p>Familias que usan los monopolios empresariales para evitar el escrutinio y ejercer influencia política para favorecer sus intereses económicos y debilitar la competencia o acabar con ella.</p> |
| <p>Coaliciones políticas en el Congreso y las regiones</p> | <p>Las alianzas multipartidistas entre diputados en el Congreso de mediano nivel y alcaldes que cambian votos por acceso a contratos del gobierno y otras recompensas estatales; muchas veces acompañadas de tecnócratas que hacen parte de estas redes o son especialistas operativos.</p> |

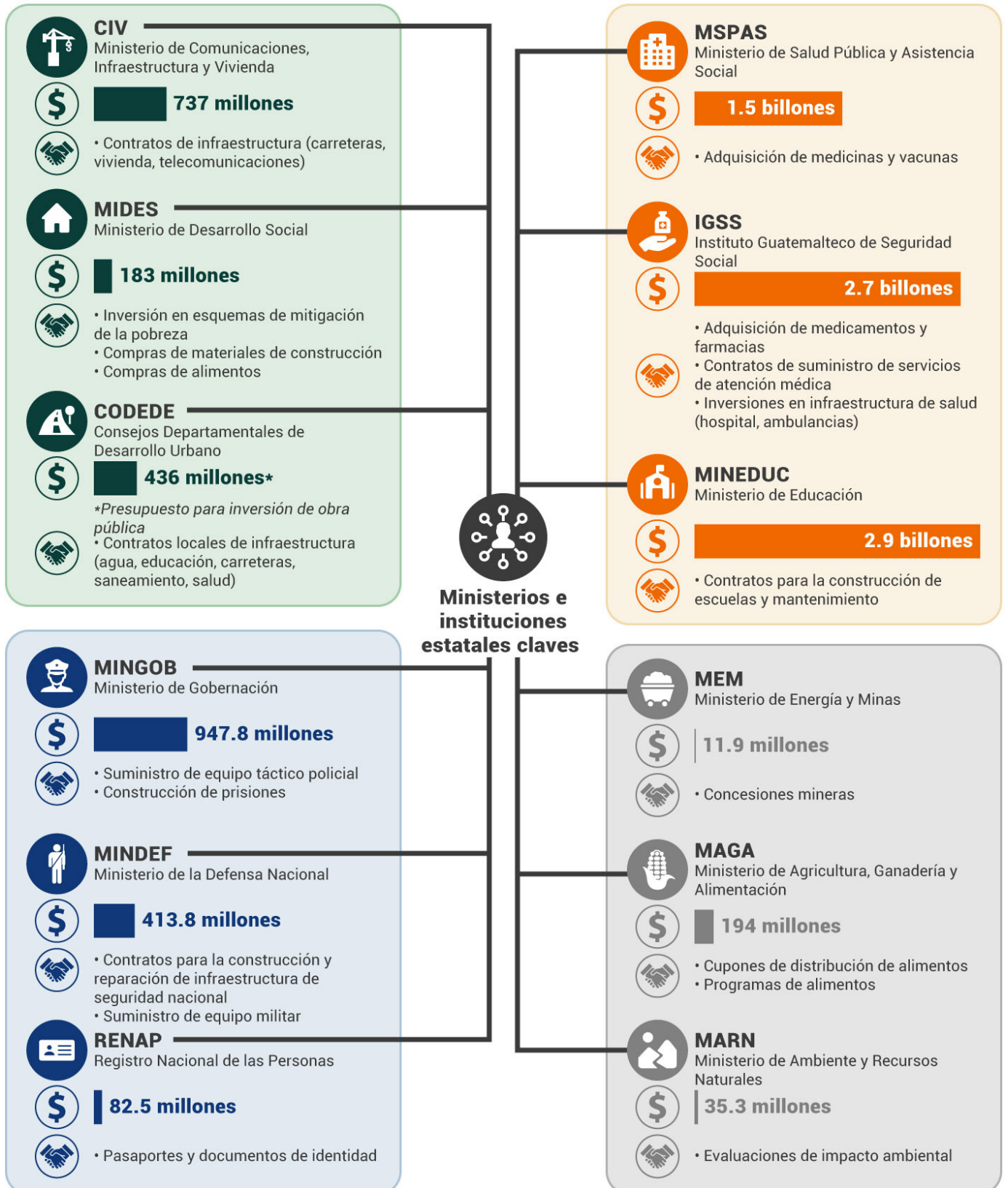
| | |
|---|--|
| Élites emergentes | Reconocidos empresarios con amplias conexiones políticas que ganaron importancia con el pago de comisiones para garantizar contratos con el gobierno para empresas privadas en los sectores de telecomunicaciones, farmacéutico y constructor, entre otros. |
| Aparatos clandestinos ilegales de seguridad (CIACS) | Redes clandestinas que datan de la guerra civil formadas por generales del ejército y agentes de inteligencia, que han penetrado altos cargos para facilitar la actividad criminal, incluyendo el narcotráfico y el contrabando, y que han extendido sus intereses económicos a la seguridad privada y la construcción, entre otros, y formado sus propios partidos políticos. |
| Organizaciones narcotraficantes (ONT) | Organizaciones criminales que facilitan el movimiento de sustancias ilegales o químicos precursores a través de Guatemala y que buscan poner aliados en las instituciones del Estado — en especial en el Congreso y alcaldías— para garantizar acceso a contratos del gobierno (para lavar dinero) y para tener protección legal. |

3. El sistema corrupto-criminal es como un carrusel: los participantes pagan por jugar y establecen una relación simbiótica con las partes del Estado más importantes para sus intereses comerciales.

Alcanzar cualquier tipo de armonía entre diferentes facciones del establecimiento corrupto-criminal requiere una alineación significativa de nodos claves del Estado, que controlan fondos del gobierno, designaciones claves en el Estado y organismos judiciales y regulatorios. En la cúspide de este sistema está la **rama ejecutiva**, que establece los parámetros del debate en relación con el presupuesto nacional, designaciones ministeriales y puede cambiar los entes de control de formas significativas. Así dirige el Ejecutivo una porción descomunal de los contratos estatales y los puestos burocráticos, que puede repartir entre sus aliados o con cualquiera que esté dispuesto a pagar una comisión considerable —un proceso que ha beneficiado considerablemente a Vamos en los últimos tres años.

Ministerios e instituciones estatales claves

Este gráfico destaca organismos claves del Estado afectados por aparatos criminales y corruptos que buscan extraer recursos públicos para beneficio particular o para asegurar que sus actividades delictivas no sean obstaculizadas.



Mayo 2023

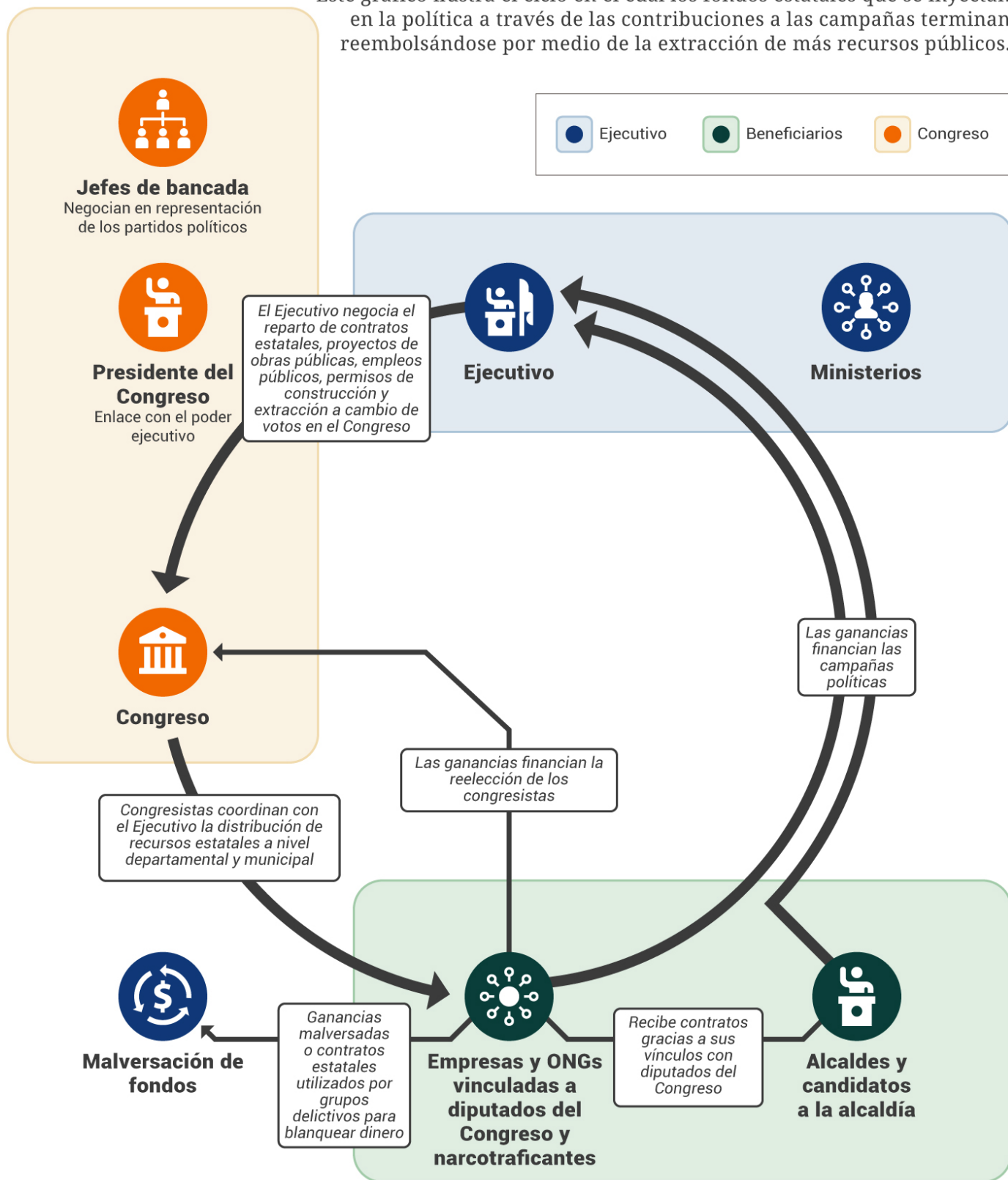
No todas las entidades del gobierno se crearon de la misma forma, y cada una de estas élites corruptas y criminales tiene diferentes niveles de interés en diferentes partes del gobierno. Las élites tradicionales, por ejemplo, buscan acceso y control sobre las autoridades tributarias, oficinas de patentes y comités bancarios. Las coaliciones políticas en el Congreso y las regiones mantienen un férreo control sobre las obras públicas. Las élites emergentes compiten por el control del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente. Los CIACS buscan control de las aduanas, del Ministerio de Gobernación y de los aparatos de inteligencia en todo el espectro. Y las ONT buscan ejercer influencia sobre las obras públicas y los comités de desarrollo local que asignan proyectos del gobierno, además de control sobre ciertos sectores de la policía y el ejército, para lavar dinero y proteger sus operaciones, entre otros intereses.

Gran parte de esta corrupción gira en torno a los **contratos** otorgados a empresas en sectores legítimos, como construcción, infraestructura, comunicaciones, salud, agricultura, industrias extractivas, seguridad, entre otros. Las empresas que reciben los contratos muchas veces son de propiedad (indirectamente) de funcionarios del Congreso o (directamente) de otros asociados, desde empresarios hasta narcotraficantes. La rama ejecutiva también se vale de sus recursos para crear respaldo en el Congreso nacional cada vez más fragmentado, con el cambio de contratos por votos y la formación de coaliciones en torno al control de ministerios y entes de gobierno para el portafolio económico de cada coalición.

Las coaliciones políticas o partidos políticos específicos que ejercen mayor control sobre el Congreso pueden negociar y regatear con el Ejecutivo tajadas del pastel de la economía. Tal es el caso de UNE, que tiene 51 de 160 escaños en el Congreso tras las elecciones de 2019. Muchos representantes han desertado desde entonces, pero los que permanecen en el partido —estimamos que unos 34— han votado en respaldo del gobierno de turno en leyes claves luego de un claro acercamiento entre Torres y Giammattei. Dada la extrema fragmentación del Congreso, aun los partidos con pocos escaños pueden también obtener recursos estatales alineándose con el statu quo. Como resultado de ello, la coalición gobernante está en libertad de legislar a favor de intereses dudosos sin oposición alguna. Ejemplos de esto incluyen la asignación de mayores fondos a ministerios cruciales para actos de corrupción o la aprobación de decretos de emergencia que flexibilizan las normas de contratación con el gobierno.

El carrusel congresista

Este gráfico ilustra el ciclo en el cual los fondos estatales que se inyectan en la política a través de las contribuciones a las campañas terminan reembolsándose por medio de la extracción de más recursos públicos.



Mayo 2023

insightcrime.org

Fuente: Entrevistas con antiguos y activos funcionarios judiciales, políticos, analistas, actores de la sociedad civil y fuentes diplomáticas.

El sistema es cíclico y se ve reforzado por el atomizado sistema de partidos políticos: Los contratos y empleos con el gobierno se entregan a compañías y personas vinculadas a diputados y partidos políticos en el Congreso, entre ellos las coaliciones legislativas, alcaldes o intereses conectados con ellos, élites emergentes y narcotraficantes; a su vez, estos actores recargan fondos a las campañas políticas con el respaldo a la reelección de los candidatos al Congreso y alcaldías. Los presidentes por tradición llegan al poder con mandatos débiles y pequeños bloques de votación en el Congreso. Por esa razón, los jefes de las principales coaliciones votantes en el Congreso han ganado mucho poder que les permite extraer mayores recursos mediante el control de redes de corrupción en otras ramas del Estado y, como lo detallamos en la sección que sigue, garantizando la impunidad.

4. La impunidad es el combustible que mantiene el motor en funcionamiento.

Para sostener y proteger sus esquemas de generación de ingresos, los bloques necesitan acceso y control de nodos claves en el sector judicial y los entes de control del Estado. Estos obtienen esto con la corrupción del sistema desde la base. Las leyes del país establecieron un mecanismo mediante el cual las “comisiones de postulación” preseleccionan candidatos verificados y calificados para los altos cargos en la judicatura y los entes reguladores antes de que el Congreso o el presidente hagan la selección final. En apariencia, las comisiones son independientes, pues muchos miembros de estas no hacen parte del gobierno.

Pero estos bloques de poder han configurado, a lo largo de más de dos décadas, mecanismos para subvertir estas comisiones de postulación, infiltrándolas mediante una combinación de tácticas abiertas y encubiertas. Los candidatos que sobreviven el proceso de verificación muchas veces carecen de calificaciones y tienen sus intereses comprometidos. Esto incluye no solo a los candidatos para la fiscalía general y los jueces de las altas cortes, sino también para los puestos del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esos compromisos pueden durar años e incluso renovarse, como lo ilustra la decisión del Congreso de no continuar con las elecciones para una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) y para magistrados de la corte de apelaciones, a pesar del actual grupo de magistrados que han excedido el periodo de cinco años, un término establecido en la constitución, que debía haber terminado en 2019.

El **Ministerio Público** es la institución más importante entre estos entes judiciales y de control que garantiza la impunidad. Este organismo puede obstruir las investigaciones sobre políticos de alto rango, lanzar ofensivas agresivas contra fiscales y jueces no alineados —como lo ha hecho en los últimos años— y atacar a actores externos, como periodistas y líderes de la sociedad civil. La fiscal general puede decidir cuáles casos se investigarán y

cuáles serán archivados; trasladar a fiscales entrometidos para alejarlos de investigaciones sensibles; y designar a empleados menos escrupulosos y más leales en cargos claves, muchas veces violando el debido proceso. El personal leal ejecutará esquemas aún más viles, como la instrumentalización de las unidades de lucha contra la delincuencia para perseguir a rivales políticos y crear bóvedas para archivar de por vida casos penales y por corrupción que salpiquen a élites corruptas y criminales.



La cooptación del sistema de tribunales de Guatemala también es un objetivo clave para diversas redes corruptas. Es un sistema basado en incentivos, donde distintas redes de magistrados y sus seguidores responden a favores políticos o financieros ofrecidos por distintos grupos de poder en busca de impunidad. Esto es más notorio con la **Corte de Constitucionalidad (CC)**, la máxima autoridad para dirimir disputas legales. La CC anteriormente sirvió como un contrapeso vital para la corrupción, pero hoy se ha convertido en un escudo para las élites tras la elección de nuevos magistrados en 2021, muchos designados a dedo por el Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema.

También es vital para la impunidad el control de la **Corte Suprema de Justicia (CSJ)** y los tribunales de apelaciones, pues esos organismos pueden obstruir las investigaciones a funcionarios del gobierno o anular condenas por corrupción. La actual CSJ fue elegida por el Congreso a partir de una lista conformada por la comisión de postulaciones en 2014. Dos de los arquitectos de esa lista fueron a prisión: uno en Estados Unidos y otro en Guatemala, mientras que un tercero se exilió en Nicaragua. Pero, como se señaló, el periodo de esa CSJ se extendió por la inacción del Congreso. Los magistrados posteriormente han bloqueado investigaciones sobre diputados del Congreso y otros operadores políticos, lo que ha creado una barrera para funcionarios sospechosos, que tienen pocos incentivos para hacer reformas radicales y quedar expuestos al escrutinio.

Tal como sucede en la parte frontal de este proceso, mediante el cual actores externos juegan un papel clave en la comisión de postulaciones para poner en movimiento el sistema de impunidad, sucede también en el otro extremo, donde personas de afuera juegan un papel al interponer denuncias penales y civiles y sembrar intrigas judiciales que benefician a los bloques de poder político. Es el caso de la ya mencionada FCT. La FCT presenta acusaciones contra los operadores que combaten la impunidad, casi todos los cuales trabajaron con los casos presentados por el organismo judicial avalado por la ONU o tuvieron alguna conexión con ellos. Jueces y fiscales se han beneficiado de las acusaciones de la FCT para formular cargos legales formales contra jueces, fiscales y periodistas, los cuales han huido del país o enfrentan cargos en Guatemala.

3

El camino hacia 2023: Una ojeada al pasado criminal de Guatemala

Los bloques criminales y corruptos que operan actualmente en Guatemala tienen sus orígenes en la guerra civil que vivió el país entre 1960 y 1996. El ejército rigió el país durante la mayor parte del conflicto. Su poder culminó en marzo de 1982, cuando el general Efraín Ríos Montt tomó el control del gobierno tras un golpe militar. Su dictadura duró apenas 17 meses, en los cuales el ejército [asesinó o desplazó a miles](#) de civiles.

Para 1985, cuando el gobierno hizo una transición para volver al mandato civil, el control del ejército se había extendido a casi todos los sectores del gobierno, incluido el ministerio de finanzas, aduanas, la registraduría, el sistema penitenciario y todos los asuntos de seguridad e inteligencia. La armada también tenía su propio banco, y numerosos oficiales habían usurpado tierras en todo el país. Ellos fueron lo que se ha llamado con frecuencia élites burocráticas, en su mayoría de origen urbano y de clase media. Tenían influencia dentro del gobierno mientras ocupaban cargos públicos y muchas veces seguían ejerciéndola después de dejar el gobierno, en ocasiones por medio de su respaldo a candidatos o partidos políticos.

Las redes militares se transformaron en redes criminales a las que unían las experiencias de guerra comunes, el trabajo de oficina y su paso por la academia militar. El modelo de estas redes se conoció como La Cofradía. Esta se remonta a los años 70, cuando sus miembros criminalizaron la oficina de aduanas, entre otros entes de gobierno, poniéndola bajo el control de la milicia con el pretexto de defender el país del ingreso ilícito de armas. Su nombre, La Cofradía, que significaba un compromiso de protegerse entre ellos, [se dio después](#) del asesinato de uno de sus fundadores.

Surgieron otros bloques criminales y corruptos, incluido un grupo asociado con Ríos Montt, quien llegaría a convertirse en [presidente del Congreso](#), donde su hija, Zury Ríos, se haría un nombre primero como diputada en el congreso. Un grupo liderado por el general Otto Pérez Molina, conocido como El Sindicato, eventualmente [ganaría la presidencia](#). También había un grupo vinculado a Álvaro Arzú, el presidente que devino alcalde eterno de Ciudad de Guatemala, [quien estrechó vínculos](#) con varios agentes de inteligencia y otros operadores militares.

Estas redes posteriormente se conocerían como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Los CIACS eran más un sobrenombre que la realidad. Eran una forma útil para entender cómo se crearon y organizaron algunas poderosas redes criminales, pero se enfrentaban entre sí, cambiaban de bandos con frecuencia y evolucionaban según las cambiantes circunstancias políticas. Sin embargo, por algún tiempo, estos CIACS originales parecieron turnarse para dirigir partes del gobierno en los más altos niveles. A comienzos de los 90, por ejemplo, el general Luis Francisco Ortega Menaldo, líder nominal de La Cofradía, fue nombrado jefe del servicio de inteligencia denominado Estado Mayor Presidencial (EMP). El EMP era el centro neurálgico de los CIACS, y Ortega Menaldo se valió de él para institucionalizar sus maquinarias corruptas y criminales.

Arzú ganó la presidencia en 1996 y selló un acuerdo de paz con la guerrilla ese mismo año. Aunque redujo considerablemente el tamaño del ejército, también creó fuertes lazos con numerosas redes militares poderosas, muchas de las cuales le sirvieron por muchos años. Entre los aliados de Arzú mientras estuvo en el poder se contaba Pérez Molina, quien se convirtió en la cara de los militares progresistas que trabajaron para promover el proceso de paz.

Pérez Molina también dirigió un grupo de soldados leales que trabajaron estrechamente con la guardia presidencial y una unidad antisequestro creada por Arzú. Posteriormente, cuando Arzú se convirtió en alcalde de Ciudad de Guatemala, algunos de estos aliados militares montaron un sofisticado aparato de inteligencia en el sótano de un edificio municipal que dio lugar a su apodo, el sótano. Este grupo secreto ayudó a Arzú a imponer un cerrojo virtual sobre la alcaldía por las dos décadas siguientes y colaboró en muchos de los entramados de corrupción y delincuencia relacionados en el centro político y económico del país.

En el 2000, Ríos Montt —que había fundado un partido político, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG)— llegó a la presidencia del Congreso. Ríos Montt fue polémico pero popular: el FRG tuvo el bloque de votación individual más grande, y el candidato designado por Ríos Montt, Alfonso Portillo, ganó la presidencia, en parte, con financiación de los esquemas de corrupción de Ortega Menaldo. Esta corrupción pronto se extendió. Algunos de los aliados más cercanos a Ríos Montt saquearon el sistema de pensiones del ejército. Y Ortega Menaldo mantuvo un fuerte control sobre los puertos y oficinas de aduanas del país, donde él y sus aliados de La Cofradía podían continuar sus variados fraudes criminales.

El gobierno Ríos Montt-Portillo (2000-2004) también desafió a las élites económicas tradicionales del país de formas sin precedentes. Esas élites habían regido el país por largo tiempo como señores feudales, usando los recursos generados por sus monopolios protegidos para ejercer influencia y controlar las políticas de gobierno. Estos canalizaron dichos intereses mediante una

poderosa asociación conocida como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que actuó como una especie de gobierno paralelo, especialmente en temas económicos. Aunque se trataba más de política que de corrupción, la coalición de Ríos Montt **desafió el CACIF**, al abrir la puerta a la importación de azúcar, pollo y bebidas gaseosas, entre otros productos.

El ascenso del bloque de Ríos Montt y sus asociados llevaron al CACIF a forjar una fuerte alianza en torno a su propio candidato, Óscar Berger, quien ganó la presidencia en 2003, al derrotar a Ríos Montt y otros. Desde el comienzo, la presidencia de Berger (2004-2008) fue un asunto más tradicional, de élites. Delegó al vicepresidente Eduardo Stein, quien venía de una familia de élite más tradicional para que entablara conversaciones con las Naciones Unidas, antiguos funcionarios de gobierno, organizaciones no gubernamentales y destacados reformistas judiciales para crear un **nuevo tipo de ente judicial** que enfrentara a los CIACS. La idea, irónicamente, se había planteado durante la administración de Portillo, y el mismo Portillo fue su proponente. Pero fue archivada cuando se topó con la oposición política, y bloqueada por la Corte de Constitucionalidad.

Entre tanto, surgió un nuevo tipo de CIACS, este con una conexión más cercana con la policía y el ministro de gobernación Carlos Vielman, quien venía de una familia importante con nexos con las élites económicas. Los nuevos CIACS adoptaron medidas extremas contra sospechosos de pertenecer a pandillas callejeras, grupos secuestradores y narcotraficantes. En 2006, por ejemplo, Vielman y su entonces director del sistema penitenciario, Alejandro Giammattei, entraron a una prisión con un gran contingente de policías bajo el pretexto de controlar un motín. En medio del caos, la policía ejecutó a siete internos en circunstancias no esclarecidas. En otro caso, la policía ejecutó a varios miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen) e incineró el vehículo en el que se desplazaban, al parecer para robar un gran alijo de dinero en efectivo que llevaban los políticos. Días después, los sospechosos, todos pertenecientes a la policía, **fueron asesinados** en prisión. (Aunque inicialmente implicados en la masacre carcelaria, Vielman y Giammattei fueron luego exonerados).

Los dramáticos casos forzaron a la administración de Berger a tomar medidas. Con el liderazgo de Stein, y con ayuda del gobierno de Estados Unidos después del asesinato de los miembros del Parlacen, la administración convenció al Congreso de aprobar una provisión que dispusiera la creación de un ente judicial internacional, al que se daría el nombre de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que sería patrocinada por las Naciones Unidas y que trabajaría muy de cerca con el Ministerio Público del país. Su misión, como lo **dejaron en claro** los documentos de creación, era la persecución de los CIACS. Muchas élites económicas vieron en este **una oportunidad** de debilitar a sus rivales en ascenso. Nunca esperaron que un día esta fuera por ellos, según un reportaje de elPeriódico.

En 2007, el mismo año en que se dio inicio a la CICIG, Álvaro Colom fue elegido presidente, al derrotar al exgeneral Otto Pérez Molina en una reñida contienda. Colom —un discreto e intelectual dueño de una fábrica de ropa— se forjó un camino distinto de las demás élites. Como primer jefe del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), organismo creado a comienzos de los noventa para mitigar la pobreza y la desigualdad, trabajó con los pobres y los marginados, principalmente en zonas rurales. En esa labor, conoció a su tercera esposa, Sandra Torres, partidaria política ambiciosa e incondicional por derecho propio. Juntos crearon la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que es hasta el día de hoy el único partido de la actualidad que ha llegado a la presidencia sin ganar el codiciado voto de Ciudad de Guatemala.

Sin embargo, otras fuerzas criminales se gestaban dentro del palacio presidencial y fuera de él. El jefe de gabinete de Colom era un hombre llamado Gustavo Alejos, presidente de una de las farmacéuticas más grandes del país, J. I. Cohen, quien también se había convertido en consultor político y financista de numerosos partidos políticos, entre ellos la UNE. Al llegar al poder, Alejos consolidó un fuerte control del Estado y de los contratos de medicamentos suministrados por el gobierno. Posteriormente el mismo Alejos se instituiría como una especie de CIACS desde fuera del gobierno, [promoviendo la corrupción y los manejos ilícitos](#) dentro de la administración de Pérez Molina.

La guardia presidencial de Colom actuaba bajo las órdenes de Carlos Quintanilla, quien luego se vería vinculado a un caso de corrupción y narcotráfico por la CICIG e [involucrado](#) con el robo de cerca de US\$9 millones del aeropuerto de Ciudad de Guatemala. Colom destituyó a Quintanilla después de descubrir que este lo espiaba. Quintanilla fue [detenido](#) posteriormente por fraude y coerción, pero su legado sigue arraigado en el palacio presidencial: él militarizó la guardia presidencial, creando una especie de poder paralelo que recuerda al EMP, según una investigación de elPeriódico.

Por fuera de la capital, los aliados de la UNE incluían a políticos y narcos. Uno de ellos era Otoniel Turcios, quien [ayudó a financiar](#) la campaña de Colom. Más adelante fue capturado, extraditado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Otro de ellos era un político llamado Manuel Baldizón, congresista por UNE del departamento de Petén, al norte del país. Baldizón crearía luego su propio partido político y, pasadas sus campañas presidenciales, [purgaría 28 meses en una prisión](#) de Estados Unidos tras declararse culpable de lavado de dinero con aportes de campaña entregados por narcotraficantes.

Mientras tanto, la CICIG comenzó a colaborar con el Ministerio Público para llevar a los CIACS viejos y nuevos ante la justicia. Esto incluyó a Vielman y Giammattei por la presunta masacre de siete reclusos. El caso [duraría años](#), se extendería por dos continentes y derivaría en el encarcelamiento temporal de Giammattei, el futuro presidente. Otros casos apuntaron al bloque Ríos

Montt, entre ellos Portillo; y partes de La Cofradía (aunque nunca a Ortega Menaldo, quien siempre logró salir indemne). Aparte del caso Vielman, el cual fue para las élites económicas un ataque directo contra uno de los suyos, la CICIG trabajaba para debilitar los CIACS, pero también varios entramados de corrupción conectados con políticos y élites emergentes.

Sin embargo, los CIACS volvieron al poder, esta vez con Otto Pérez Molina, quien fue elegido con un margen cercano a los 10 puntos en 2011 sobre Manuel Baldizón. Por años, Pérez Molina se había forjado una reputación de reformista. El exgeneral había, por ejemplo, respaldado la aprobación de la CICIG y había sido proponente del acuerdo de paz con la guerrilla. Y después de tomar posesión, Pérez Molina mantuvo en su cargo a Claudia Paz y Paz, fiscal general pro derechos humanos y partidaria de la CICIG. Al comienzo, esto pareció jugar a favor del presidente, pues Paz y Paz siguió varios casos históricos contra el ejército, incluido uno contra el general Ríos Montt por crímenes de guerra en los años ochenta. El caso **debilitó** los CIACS rivales y fortaleció la imagen de Pérez Molina, pero también movió a la acción a exoficiales del ejército y élites económicas de extrema derecha, algunas de las cuales, a instancias de la hija del general, Zury Ríos, tomaron partido públicamente por el acosado exgeneral.

Es más, la fachada de Pérez Molina como reformista de avanzada también comenzaba a derrumbarse. Su Partido Patriota había creado, de muchas formas, lo que un analista del crimen llamó “los CIACS perfectos”. Su vicepresidenta, Roxana Baldetti, **creó** un escuadrón de vigilancia para los puertos y las oficinas de aduanas. Su ministro de gobernación, también un condecorado exoficial del ejército, **monetizaron el ministerio** con coimas por todo, desde el papel higiénico hasta las cámaras de seguridad. El jefe de cartera del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) **vendió los servicios estándares de su oficina** por una sobretasa. El presidente de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) — también un antiguo oficial del ejército— **canalizó contratos** hacia candidatos no calificados por un precio y usó el IGSS como departamento de caja menor para **manipular la votación** de los jueces a las altas cortes. Como un capo de la mafia, Pérez Molina **cobraba una tajada** de todo eso.

La CICIG, bajo la dirección de su nuevo comisionado, el juez colombiano Iván Velásquez, vigilaba. A partir de 2015, casi un año después de la llegada de Velásquez, la CICIG y sus aliados del Ministerio Público comenzaron a revelar una pila de casos de corrupción que habían estado recogiendo. Para sorpresa y consternación de la élite económica, los casos no se dirigían únicamente a los CIACS —también se dirigían a ellos y a sus aliados más cercanos en algunos de los mayores conglomerados industriales, agroindustriales y de telecomunicaciones del país, así como a bancos, hoteles y puertos. El aluvión de acciones judiciales se vio como una señal de que al fin prevalecería la justicia en Guatemala. Velásquez se convirtió en una especie de héroe popular, y las expectativas **en torno al anuncio semanal** de los casos se volvió casi un juego, tipificado por el numeral #JuevesdeCICIG.

Algunos de los casos eran más sólidos que otros, pero con el anuncio de cada nuevo caso, la comisión parecía estar acercándose más a los bloques criminales y corruptos que por largo tiempo habían poblado el panorama político de Guatemala. En mayo de 2015, la CICIG anunció cargos contra la vicepresidenta Baldetti por orquestar un elaborado esquema de corrupción en agencias de aduanas de todo el país y le pidió al Congreso que retirara la inmunidad a Pérez Molina para investigarlo. Incluso antes del anuncio de los cargos contra Baldetti, los manifestantes comenzaban a inundar las calles, en particular la plaza frente al palacio presidencial. Las protestas culminaron a finales de agosto y obligaron al Congreso a despojar de su fuero a Pérez Molina. Este renunció, fue acusado de corrupción y llevado a prisión junto a su vicepresidenta. Ese fue el apogeo del poder de la CICIG.

Un gobierno interino mantuvo en orden el Estado durante las tumultuosas elecciones que siguieron. Los tres principales contendores eran el antiguo diputado de la UNE, Manuel Baldizón; el ministro de CIV de Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, y la ex primera dama Sandra Torres. Sinibaldi pronto se daría a la fuga por denuncias de corrupción; Baldizón se desvanecería, en parte por su cercanía con el narcotráfico; Torres era fuerte pero tenía un techo. La novedad se presentó en la forma de un comediante de televisión convertido en político, con la esperanza de que su única incursión en política aparte de esta había sido una fallida campaña a la alcaldía de un suburbio de Ciudad de Guatemala. No importó: en octubre de 2015, Jimmy Morales derrotó a Sandra Torres en la segunda vuelta por un margen de más de 30 puntos.

Pero si Guatemala clamaba por algo nuevo, lo que consiguieron fue más de lo mismo. Respaldaba a Morales el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), un partido fundado y financiado por antiguos militares que parecían algo semejante a los CIACS. Muchos de ellos tenían conexiones con la red de Vielman conectada con delitos anteriores. Uno de los consejeros más cercanos a Morales era el general Ricardo Bustamante, quien trabajó durante años cerca de Otto Pérez Molina; detrás de Bustamante había una cantidad de otros oficiales del ejército activos y en retiro. Es más, entre los financistas de Morales había miembros prominentes del CACIF, entre otras élites económicas, algunos de los cuales presuntamente desviaron dinero ilegalmente a la campaña de Morales en el último minuto.

La CICIG, aún con el éxito de haber derrocado el régimen de Pérez Molina, puso la mira en casos más recientes. En septiembre de 2016, la comisión anunció que seguía un pequeño caso de corrupción que a la larga entrampó al hijo y al hermano de Morales que precedían el tiempo de Morales como candidato presidencial. Ambos fueron a prisión por un breve periodo por ese caso a comienzos de 2017. Y aunque la comisión no podía investigar judicialmente a los patrocinadores militares de Morales, sí podía hacerlo con las élites del CACIF que lo financiaron en la segunda vuelta electoral, al igual que al presidente. El

caso era relativamente pequeño en términos económicos, pero monumental en términos simbólicos, en especial porque, después de que ocho de los acusados admitieron su culpabilidad en una dramática conferencia de prensa, incluso algunos miembros de las familias más renombradas y adineradas del país, la CICIG los acusó de delitos insignificantes de financiación electoral. En una campaña por mostrar que investigaba a todos los partidos políticos, la CICIG también abrió casos contra miembros del Congreso, [el expresidente Colom de UNE](#), y [Álvaro Arzú](#), el presidente convertido en alcalde.

Para entonces, había ganado bastante fuerza una campaña coordinada de relaciones públicas para desacreditar a la CICIG en la prensa y las redes sociales. Esa campaña fue orquestada, en parte, por Ricardo Méndez Ruiz, cuyo padre había sido ministro de gobernación durante el breve periodo de Ríos Montt como presidente a comienzos de los 80. Méndez Ruiz fue un empresario que creó una organización no gubernamental llamada la Fundación contra el Terrorismo (FCT) en 2013. Esta se creó al parecer para defender a exoficiales del ejército que enfrentaban cargos por abusos contra los derechos humanos, pero su alcance se ampliaría con el tiempo. En 2018, una nueva fiscal general, Consuelo Porras, comenzó a entorpecer los casos de la comisión y a marginar a sus aliados en el Ministerio Público. Morales también puso a un ministro de gobernación, Enrique Degenhart, que había trabajado con la administración Arzú en Ciudad de Guatemala y rápidamente se movilizó para cancelar cualquier cooperación con la comisión.

La prensa llamó a estas fuerzas un [Pacto de Corruptos](#), pero era menos un pacto y más un acuerdo tácito por la necesidad de trabajar de manera concertada para impedir que el Ministerio Público abriera más casos y para cerrar la CICIG. Morales declaró persona non grata al colombiano Velásquez y comenzó a negar visas a los investigadores de la comisión. En agosto de 2018, en un exaltado discurso, el presidente [declaró](#) que no renovarían el mandato de la CICIG. Poco más de un año después, el 1 de septiembre de 2019, la CICIG empacó la última de sus cajas y salió del país.

Desde entonces, el Pacto de Corruptos ha pasado de la defensiva a la ofensiva. Una coalición que incluyó a destacados miembros de los CIACS, narcotraficantes, políticos corruptos, lobistas de intereses especiales y un pequeño número de élites empresariales se unieron detrás del exdirector del sistema penitenciario y exrecluso, Alejandro Giammattei, para catapultarlo a la presidencia en 2020. Para 2021, comenzaron a tomar forma los esfuerzos del establecimiento político para garantizar la impunidad y perseguir a cualquiera que hubiera ayudado a la CICIG.

Muchos otros se han unido a esta campaña, en especial Méndez Ruiz y la fiscal general Porras, pero también numerosos jueces de apelaciones y de las altas cortes, así como destacadas élites económicas que financian discretamente iniciativas de cabildeo en Washington D. C. Lo que ha seguido ha sido [una purga implacable](#) de fiscales y jueces, algunos de los cuales huyeron del país y otros enfrentan cargos penales en Guatemala.

Este es el convulsionado ambiente en medio del cual Guatemala irá a las elecciones presidenciales en 2023. Cumplido su principal objetivo, es posible que el Pacto se divida en facciones, pues cada una tiene distintos orígenes, prioridades y mecanismos para seguir ejerciendo influencia en el sistema judicial tanto a favor como en contra de quienes percibe como enemigos. Algunas de estas facciones son las que describiremos en los próximos capítulos.

4

Bloc I: Vamos - la lucha por seguir en el juego

El bloque político que rodea la administración del presidente Alejandro Giammattei (2020-presente) es actualmente la estructura de poder dominante en Guatemala. En pocos años, ha logrado algo casi inédito en la era de posguerra del país: consolidar el poder en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Esta centralización del poder no es un reflejo de la popularidad de Giammattei — en una encuesta realizada por CID Gallup en 2022, el presidente guatemalteco tuvo un **índice de aprobación** de 19%, el más bajo del continente americano en su conjunto—, y su partido, Vamos, tiene un bloque de votación minoritario en el Congreso. Más bien, esto es una señal de la capacidad del bloque para aprovechar los poderes ejecutivos para intercambiar favores políticos con las élites tradicionales y emergentes y, por esa vía, posicionarse como nodo central de una alianza horizontal que busca perpetuar el poder en los ramas de poder claves del Estado.

La alianza, que echó raíces durante el gobierno de Morales cuando las élites tenían el interés común de expulsar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se ha transformado en una campaña sistemática para convertir al sector judicial en un escudo de actores nefarios y un arma para cobrar venganza contra quienes alguna vez han combatido contra la impunidad. El resultado ha sido un periodo de corrupción y peculado, que ha ido escalando gradualmente hasta salirse de control con el hundimiento en la ingobernabilidad de sectores claves del Estado. La cuestión planteada por las fuentes que hablaron con InSight Crime no era si Vamos tiene posibilidades de ganar la presidencia. La cuestión era si esta coalición poco estructurada se mantendría intacta tras las elecciones.

Poder Ejecutivo, Congreso y alcaldes

La influencia del bloque de Vamos reside en su control de la presidencia. A través de su control sobre el presupuesto nacional y ministerios claves, el ejecutivo administra un barril casi sin fondo de recursos del Estado que pueden repartirse dentro del bloque o usarse para forjar alianzas en sectores claves para posibles esquemas de corrupción, a saber, en el Congreso o la rama judicial. El principal negociador del bloque es el ex jefe de gabinete de Giammattei, [Miguel Martínez](#), según fuentes del Congreso y analistas políticos entrevistados por InSight Crime. Martínez amasó poder y contactos después de que Giammattei lo designara como director de una opaca comisión presidencial, conocida como Centro de Gobierno, a principios de 2020. Esta función le permitió a Martínez vigilar a todo el gabinete e influir en la distribución de fondos estatales a través de ministerios claves.

Cómo se reparte el pastel el Ejecutivo

Aunque Martínez ya no es funcionario del gobierno —el Centro de Gobierno se [disolvió a finales de 2020](#)— sigue siendo un nodo importante para quien busque conseguir contratos públicos o puestos de trabajo en el gobierno a disposición del Ejecutivo, según múltiples fuentes consultadas por InSight Crime. Gran parte de esta actividad relacionada con el bloque Vamos se ha centrado en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). El Ministerio de CIV y sus numerosos directorios presiden los contratos de infraestructura y telecomunicaciones más grandes y lucrativos del país, que se han adjudicado a empresas cercanas a Giammattei, según una investigación de [el Periódico](#) publicada en 2022.

Otros ministerios importantes son el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Cada año, estas instituciones administran miles de millones de dólares en contratos atención en salud y compra de fármacos. Especialmente en [el caso del IGSS](#), se han utilizado durante años para pagar [favores políticos o sobornos](#).

Los fondos asignados al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y al Ministerio de Educación (MINEDUC) también pueden ser utilizados por el Ejecutivo. La dinámica es en gran medida la misma: el Ejecutivo puede distribuir programas de ayuda a la pobreza y alimentación, permisos de minería y contratos de construcción de escuelas, a cambio de favores políticos y, en algunos casos, de conseguir apoyo político en las zonas pobres.

Para otros, como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el sistema es más solapado. Dado que este ministerio **administra y valida** las condiciones medioambientales y la aprobación de la comunidad para proyectos mineros e hidroeléctricos, puede convertir esta supervisión en beneficios, así como en influencia política y económica.

El toma y dame del Congreso

El control de los fondos estatales por parte del bloque ha hecho que los diputados del Congreso acudan en masa al Gobierno, lo que ha permitido a Vamos transformar un bloque del Congreso que solo contaba con 17 diputados (de 160) en una **coalición mayoritaria** que abarca al menos 13 partidos y alrededor de dos tercios de los escaños de la legislatura: Vamos (17 escaños), UNE (34), la Unión del Cambio Nacional (UCN) (12), Valor (9), el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) (8), Bienestar (8), Humanista (6), Todos (6), Creo (5), Prosperidad Ciudadana (3), PAN (2), Unionista (2), Podemos (1).

Los votos de los partidos aliados han permitido al gobierno aprobar una serie de proyectos de ley en el Congreso que facilitan la corrupción, desde aumentos en el presupuesto nacional hasta decretos de urgencia que debilitan la fiscalización de las licitaciones públicas. En este sentido, el poder reside en el presidente del Congreso, que establece la agenda legislativa y sirve de enlace entre los representantes y los recursos del Ejecutivo. A lo largo de su gestión, el gobierno de Giammattei ha colocado en ese rol a dos operadores de primera línea de Vamos: primero, Allan Rodríguez, y más recientemente, Shirley Rivera.

Rodríguez, jefe del Congreso entre 2020 y 2022, supuestamente ofreció sobornos a los representantes para asegurar votos para un proyecto de ley de estado de emergencia, según el Departamento del Tesoro de EE.UU., que sancionó a Rodríguez por ese proyecto de ley y, además, por la concesión de “**subvenciones de construcción a cambio de sobornos financieros**”. Rivera relevó a Rodríguez en la presidencia del Congreso en 2022, tras ganarse supuestamente la confianza de Giammattei y los diputados afines. Ahora ayuda a gestionar empleos públicos, dinero y contratos estatales entre el bloque de Vamos y los partidos aliados en el Congreso, de acuerdo con un antiguo presidente del Congreso.

Vamos: Red política

Esta gráfica muestra la red de actores que apoyan al Partido Político Vamos.



Mayo 2023

La influencia que ejercen ahora actores como Rivera y Rodríguez es un testimonio del creciente peso de las coaliciones en el Congreso, una clase política emergente que ha consolidado su poder aprovechando su influencia en la distribución de los fondos públicos. La evolución del Congreso como centro neurálgico de las tramas corruptas para hacer dinero ha contribuido a abrir el campo de juego a élites no tradicionales, ya que muchos de sus miembros se han abierto camino a través de la pesada burocracia media antes de aprender a aprovechar sus cargos para ayudar a hacer crecer empresas que puedan financiar sus ambiciones políticas. Otros no tienen ninguna experiencia en el sector público, sino que han utilizado capital procedente de la actividad comercial y la propiedad de tierras o, en algunos casos, ganancias ilícitas procedentes del hampa, para financiar su entrada en la arena política. Estos nuevos actores parecen ser cada vez más independientes de otros actores poderosos, como los intereses del narcotráfico documentados más adelante.

Camino al poder: viejos alcaldes, nuevos aliados

Aunque el bloque de Vamos ha acumulado un gran poder político, sus posibilidades de conservar la presidencia en las próximas elecciones parecen escasas. El candidato presidencial del bloque, el veterano diputado Manuel Conde, dista mucho de ser un nombre conocido y ha obtenido sistemáticamente resultados inferiores a los de los favoritos. Consciente de la modesta popularidad del candidato, la estrategia electoral del bloque se ha centrado en reclutar cerca de **200 candidatos a la alcaldía** con la esperanza de conseguir suficientes votos para que Conde pase a la segunda vuelta contra un candidato con un techo firme.

El plan parece centrarse en el acceso del bloque a los recursos estatales, con candidatos a la alcaldía capaces de intercambiar apoyo político por mayores fondos municipales y proyectos de obras públicas. En los últimos meses de 2022, el Congreso aprobó uno de **los mayores presupuestos de los últimos tiempos** con aumentos significativos **de los fondos** destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE). Dichos consejos están dirigidos por gobernadores departamentales, nombrados por el Ejecutivo, que coordinan con alcaldes y diputados la distribución de unos Q3.400 millones (US\$436 millones) anuales entre más de 2.000 proyectos de obras públicas, que abarcan educación, carreteras, saneamiento y salud. Los alcaldes se enfrentan a poco escrutinio en lo que respecta al gasto público, ya que todos gozan de inmunidad política en virtud de la **legislación guatemalteca**.

El reclutamiento de alcaldes también abre la puerta a la financiación ilícita del crimen organizado. Especialmente en las zonas fronterizas, los narcotraficantes mantienen estrechos vínculos con los alcaldes y aportan fondos políticos a cambio de contratos de construcción utilizados para blanquear dinero. Varias

notas de prensa han señalado vínculos entre algunos candidatos municipales de Vamos y el narcotráfico, incluido un alcalde al que las autoridades guatemaltecas habían asociado anteriormente con una red de narcotráfico y que [admitió en público](#) que era narcotraficante.

La estrategia electoral del bloque también se basa en posicionar aliados claves en el Congreso, algunos vinculados al narcotráfico. Ganar incluso unos cuantos escaños en el Congreso aseguraría la supervivencia política del partido — independientemente de los resultados de las elecciones presidenciales— al proporcionar una plataforma para intercambiar votos a cambio de recursos estatales. En este sentido, Vamos ha absorbido a varios exrepresentantes de la Unión del Cambio Nacional (UCN), un partido político fuertemente vinculado al narcotráfico. En 2021, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) [ordenó la disolución del partido](#) por presunta violación de las normas de financiación electoral.

Tal vez la diputada de UCN más llamativa que se presentará con Vamos a las próximas elecciones sea Sofía Hernández, ex vicepresidenta del Congreso. La familia de Hernández está relacionada con un grupo de narcotraficantes guatemaltecos, conocido como [los Huistas](#), que opera en su departamento natal de Huehuetenango. A principios de 2021, el Ministerio Público detuvo a uno de los hermanos de Hernández por cargos relacionados con un encubrimiento de blanqueo de dinero relacionado con la red de narcotráfico. Pero hay otros excandidatos de la UCN con influencia en regiones claves para el narcotráfico, como Carolina Orellana (Zacapa), Napoleón Rojas (Santa Rosa) y Jaime Lucero (Jalapa).

También hay representantes de otros partidos que se presentan al Congreso con Vamos en provincias que albergan grupos de narcotraficantes, como Boris España (candidato de Todos en la provincia de Chiquimula) y Thelma Ramírez (candidata de la UNE en Izabal). La amplia distribución geográfica de los candidatos podría abrir la puerta a fondos de campaña susceptibles de cambiar las reglas del juego. El sistema es cíclico: los fondos estatales a los que acceden los actores ilícitos se reinvierten en las campañas electorales. Sus contribuciones se reembolsan con más contratos, y así sucesivamente.

Negar la justicia, destruir a los enemigos

El núcleo de los esfuerzos del bloque ha sido una campaña orquestada para socavar el sector judicial desde dentro. Al ejercer una influencia constante sobre las principales instituciones judiciales, Giammattei y sus aliados al parecer han creado un escudo contra las investigaciones judiciales. La influencia del bloque sobre el sector judicial también le ha permitido expulsar

a fiscales y jueces independientes que en algún momento lideraron la lucha contra la corrupción de alto nivel, como parte de un esfuerzo calculado para eliminar contrapesos y revertir los esfuerzos en favor del estado de derecho realizados durante la época de la CICIG. El poder de Giammattei dista mucho de ser absoluto. Más bien, el presidente aprovechó el momento político para fomentar, reforzar y sincronizar alianzas de mutuo beneficio entre diversas redes y los principales operadores del sector judicial.

Una alianza non sancta: el presidente y el Ministerio Público

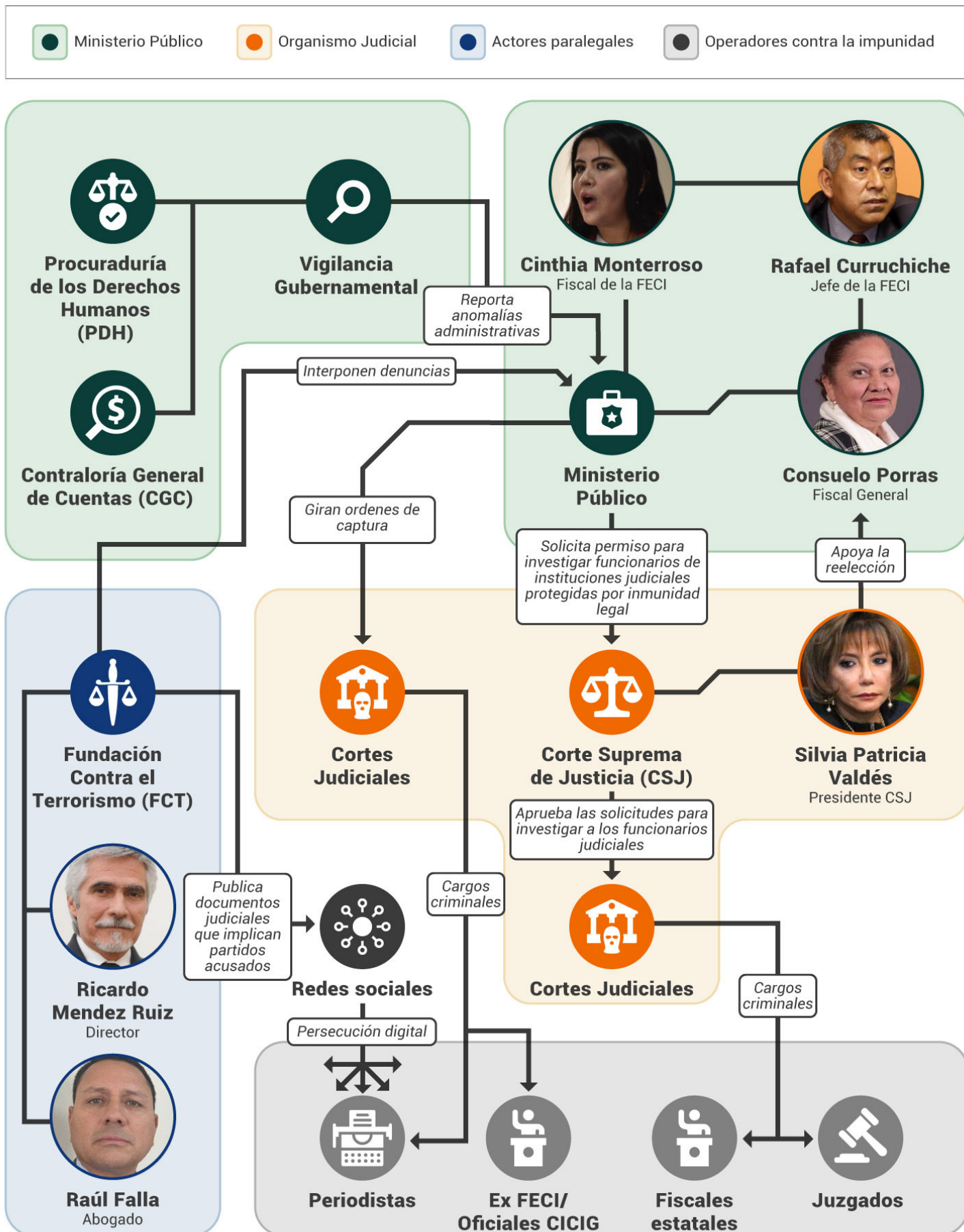
El camino para influir en el sector judicial empieza por arriba, con la fiscal general Consuelo Porras. El Ministerio Público tiene una influencia extraordinaria, ya que sus fiscales pueden obstruir investigaciones penales para proteger a sus aliados o, por el contrario, abofetear a sus rivales con cargos penales. La fiscal general Porras es también la máxima autoridad cuando se trata de contratar y despedir fiscales y otros funcionarios, lo que le permite llenar la Fiscalía General de fiscales y burócratas leales y, al hacerlo, posiblemente manipular casos de corrupción de alto perfil. El bloque de Vamos ha dependido en gran medida de Porras, cuya Fiscalía General ha fallado a favor de Giammattei y sus aliados en múltiples ocasiones. Esta protección ha ido de la mano de una campaña más amplia para desmantelar las principales unidades anticorrupción de la Fiscalía General.

El objetivo principal de esta campaña fue inicialmente la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). La FECI trabajaba hombro a hombro con la CICIG y asumió el trabajo de la comisión tras su salida en 2019. La unidad concentra el grueso de los grandes casos de corrupción en Guatemala, y tras la salida de la CICIG siguió erizando la piel de las élites acusadas de corrupción. Fueron fiscales de la FECI, por ejemplo, dirigidos por el exjefe de la unidad, Juan Francisco Sandoval, quienes en 2021 comenzaron a [investigar](#) a Giammattei por una presunta aceptación de sobornos de empresarios rusos. En julio de 2021, Porras [despidió](#) a Sandoval y lo sustituyó por Rafael Curruchiche.

El nombramiento de Curruchiche puso patas arriba el papel de la FECI. En lugar de perseguir los actos de corrupción, la unidad parece ahora mantener los casos de corrupción fuera de los expedientes. Al mismo tiempo, Curruchiche ha vuelto la mirada de la FECI hacia los fiscales y jueces que una vez trabajaron en casos de corrupción de alto perfil. [Decenas de operadores contra la impunidad](#) se han visto obligados a exiliarse o han sido encarcelados tras enfrentarse a cargos penales promulgados por la Fiscalía General. Porras también ha [transferido](#) a fiscales de la FECI a otras unidades, mientras que otros han dimitido o han huido del país tras recibir amenazas de muerte. Las acusaciones penales presentadas por la Fiscalía General también han conseguido destituir a algunos de los principales jueces del país, incluida [la juez](#) que presidía el caso de soborno en el que estaba implicado Giammattei.

Vamos: Judicialización de operadores contra la impunidad

Esta gráfica refleja cómo una red de oficiales del gobierno, instituciones estatales y actores paralegales ha perseguido legalmente a funcionarios judiciales y otros operadores.



A menudo, los fiscales se han basado en tecnicismos administrativos para incoar causas penales en las que se acusa a los operadores de la lucha contra la impunidad de obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. Los casos son casi siempre confidenciales, lo que hace imposible examinar las acusaciones. Según una investigación de elPeriódico, los despidos y traslados de Porras también han debilitado otras ramas de la Procuraduría General de la República fundamentales para hacer frente a la impunidad, incluidas las unidades que se ocupan de la corrupción en general, los delitos electorales y administrativos, y los derechos humanos, esta última área responsable de procesar a veteranos militares acusados de crímenes de lesa humanidad que se remontan a la guerra civil. Varios fiscales han sido despedidos sin el debido proceso. Los que intentan impugnar un despido por la vía judicial se enfrentan a una espera de hasta cinco años, dijo a InSight Crime el investigador de Impunity Watch Alejandro Rodríguez. Los fiscales se enfrentan ahora a represalias que ponen fin a su carrera por romper filas con Porras, lo que reduce considerablemente los incentivos para actuar con independencia de los intereses corruptos. Por otro lado, las posibles recompensas por unirse a la clase dirigente corrupta parecen ser significativas.

En 2021, por ejemplo, Porras bloqueó una orden de detención contra [Cinthia Monterroso](#) después de que el ex jefe de la FECCI, Sandoval, la acusara de solicitar información sobre personas no implicadas en las investigaciones. Más tarde, cuando Curruchiche sustituyó a Sandoval, Monterroso fue [nombrada](#) jefa de una unidad de la FECCI que se ocupaba de muchos de los casos más delicados de la oficina, incluida la investigación sobre los sobornos presuntamente pagados a Giammattei por empresarios rusos. Desde entonces, casi todas las principales investigaciones de corrupción de la FECCI se han estancado bajo la dirección de Monterroso, que ha iniciado investigaciones contra destacados periodistas que informaban sobre corrupción.

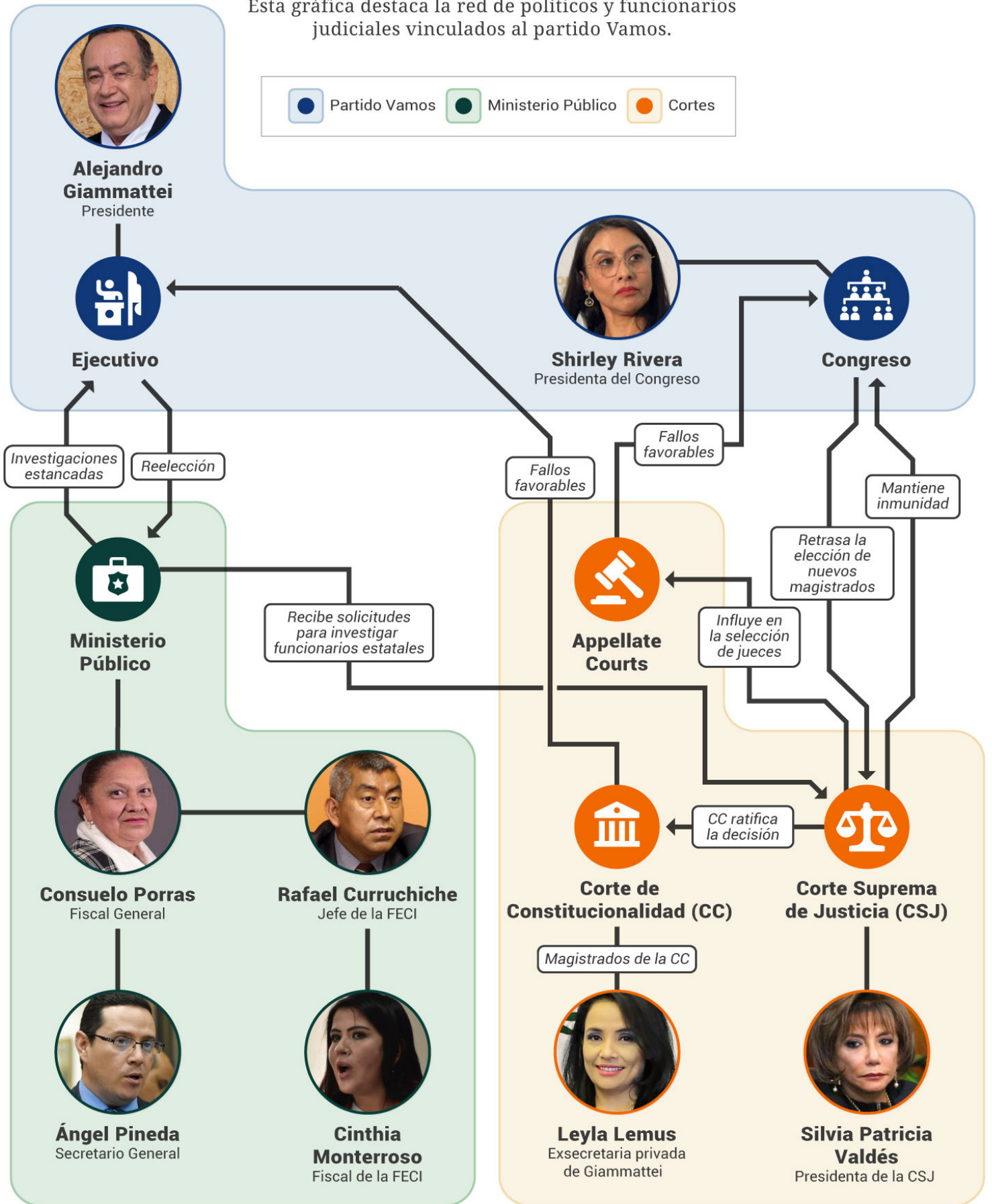
El gobierno de EE.UU. ha tomado nota de estos acontecimientos en la Fiscalía General. En 2022, el Departamento de Estado [sancionó a Porras](#) por obstruir y socavar investigaciones anticorrupción para proteger a aliados políticos. Un año antes, el Departamento de Estado [sancionó a Ángel Pineda](#), un alto colaborador de Porras, por obstruir “investigaciones sobre actos de corrupción al interferir en indagatorias anticorrupción” e informar a “objetivos de investigación sobre casos que se estaban preparando en su contra”.

Aun así, Porras tiene ahora un enorme poder. Y el resultado de las elecciones de 2023 no afecta a su segundo mandato de cinco años, que comenzó en 2022.

Vamos: Red judicial

Esta gráfica destaca la red de políticos y funcionarios judiciales vinculados al partido Vamos.

● Partido Vamos
 ● Ministerio Público
 ● Cortes



Mayo 2023

El apilamiento de los Altos Tribunales

Desde su llegada al poder, el gobierno de Giammattei también ha vuelto a situar a la Corte de Constitucionalidad (CC) —la máxima autoridad jurídica del país— en la órbita de sus intereses políticos. La CC tiene la última palabra en disputas legales de alto nivel. Durante el gobierno de Jimmy Morales sirvió de contrapeso vital. Para la muestra un ejemplo, denunciado por el Periódico en diciembre de 2018, el expresidente intentó desmantelar la CICIG expulsando a sus altos funcionarios, pero la corte bloqueó estos esfuerzos.

Esto pareció cambiar con la elección de nuevos magistrados a principios de 2021. La remodelación vio a los candidatos —en particular los propuestos por la presidencia, el Organismo Judicial (OJ) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ)— inclinar la balanza de la corte a favor de intereses aparentemente alineados con el Pacto de Corruptos, así como con la administración Giammattei y el Ministerio Público. Según Alejandro Rodríguez, de Impunity Watch, la Corte es ahora “aliada de Porras” y ejerce su autoridad para avalar las acciones de la Procuraduría General de la República, así como para dictar sentencias favorables que han bloqueado investigaciones sobre élites y operadores judiciales acusados de corrupción.

De hecho, el reajuste de la Corte de Constitucionalidad ha sido beneficioso para el bloque de Giammattei. La CC ha **limitado**, por ejemplo, la capacidad de los comités del Congreso para convocar a miembros del ejecutivo con fines de rendición de cuentas.

La consolidación del poder en el sector judicial también se ha beneficiado de un exitoso esfuerzo por paralizar la elección de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo y los tribunales de apelación. Las elecciones para elegir a los nuevos magistrados de los altos tribunales estaban previstas para 2019, pero la CC suspendió el proceso después de que la Fiscalía General revelara una supuesta trama para copar los altos tribunales con aliados. La trama era liderada por una **extensa red de operadores** que, según una **investigación posterior de la FECCI**, incluía a representantes del Congreso y magistrados de la CSJ. Desde entonces, la inacción del Congreso ha impedido que se reanude el proceso de selección.

Ambos se han beneficiado de esto. Para el Congreso, que vota una lista final de candidatos al alto tribunal, retrasar las elecciones parece haberles ayudado a mantener su fuero judicial. La actual alineación de magistrados de la CSJ ha rechazado repetidamente los recursos que pretendían despojar a los representantes del fuero que les otorga la Constitución durante sus mandatos, incluso en 2020, cuando la CSJ **protegió a 92 representantes** a quienes la Fiscalía General acusó de paralizar esas mismas elecciones a las altas cortes. Los diputados, a su vez, han devuelto el favor no votando por nuevos magistrados, a pesar de que los actuales jueces de la CSJ y de la Corte de Apelaciones han sobrepasado en cuatro años el límite constitucional de sus mandatos.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala es Silvia Patricia Valdés. Numerosos observadores de los tribunales dijeron a InSight Crime que Valdés es cercana al presidente Giammattei. Valdés es la figura más influyente dentro de las altas cortes. La presidenta de la CSJ tiene acceso a una serie de funciones financieras y administrativas que puede aprovechar para asegurarse favores políticos. Por ejemplo, el presidente de la CSJ asigna jueces a los tribunales que se ocupan de casos de corrupción de alto perfil, mientras que envía a otros a regiones remotas donde los tribunales se ocupan de casos menores. Y, como ilustra el proceso de selección en el que Consuelo Porras volvió a ser **nombrada** fiscal general, el presidente de la CSJ desempeña un papel crucial a la hora de determinar quién ocupa otros puestos judiciales cruciales.

La CSJ bajo Valdés también ha desempeñado un papel fundamental en la aceleración de las investigaciones sobre jueces independientes de alto nivel, algunos de los cuales estaban involucrados en casos contra el presidente, así como sobre ex oficiales del ejército acusados de violaciones de derechos humanos. En 2022, la CSJ falló a favor de las solicitudes de levantamiento de la inmunidad de dos de los jueces anticorrupción más experimentados del país: **Erika Aifán** y **Miguel Ángel Gálvez**. La oficina de Aifán manejó pruebas que implicaban al presidente Giammattei en presuntos actos de corrupción, mientras que Gálvez se convirtió en objetivo al presidir un importante caso sobre abusos cometidos por veteranos militares durante la guerra civil. Ambos magistrados se exiliaron tras perder su inmunidad.

5

Bloc II: La estrategia unidireccional de la UNE

La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) es uno de los partidos políticos más duraderos de Guatemala y ha sido durante mucho tiempo una potencia en el Congreso de la nación, abriendo la puerta a la corrupción y la impunidad. El bloque, encabezado por la candidata presidencial en serie y ex primera dama, Sandra Torres, aprovecha su considerable coalición en el Congreso, donde los votos pueden intercambiarse por el acceso a contratos estatales y puestos de trabajo en el gobierno, para construir alianzas mutuamente beneficiosas con otras facciones políticas y actores influyentes en el sector judicial. Esto último ha protegido a Torres y a sus aliados de acusaciones de corrupción que podrían poner en peligro su carrera.

Aunque tener las llaves del Congreso convierte a la UNE en un aliado codiciado, la vulnerabilidad del bloque radica en su dependencia de los trueques y en el aparente techo de su aspirante presidencial. Forjar alianzas que favorezcan los intereses de la UNE ha requerido que el partido, que se presenta como un grupo de oposición, se alinee con el poder ejecutivo y, por extensión, con la alianza horizontal de élites emergentes y tradicionales que dominan el acceso a los recursos del Estado. Y aunque Torres es la candidata con mayor renombre, conserva una sólida base política y se espera que llegue a la segunda vuelta, a pesar de que nunca ha obtenido el apoyo de más de un tercio del electorado en una competición cara a cara. No obstante, dada la naturaleza impredecible de esta carrera, es posible que este sea el momento en que rompa esa barrera.

El carrusel de la UNE en el Congreso

El bloque de la UNE gira en torno a un grupo clave de operadores políticos, entre los que se encuentra Torres, que negocian favores con otras facciones políticas y posicionan aliados en poderes clave del Estado. Estas negociaciones se centran en una delicada relación entre altos funcionarios de la UNE y el Poder Ejecutivo, además de un constante intercambio de favores entre representantes de la UNE y otras coaliciones parlamentarias.

Intermediarios del Congreso

En los últimos años, se ha producido una importante alineación de intereses entre los respectivos bloques legislativos de Torres y el presidente Alejandro Giammattei. Esto ha eliminado cualquier oposición factible a la aprobación de proyectos de ley en el Congreso, incluyendo aquellos que podrían haber facilitado la corrupción. Los dos bloques han generado una relación de interdependencia, donde Giammattei se beneficia de los votos de la UNE —oficialmente el partido **tiene** algo menos de un tercio de los escaños del Congreso, aunque algunos representantes han desertado a otros partidos— y Torres recibe ayuda para superar los obstáculos legales y sobrevivir a una rebelión dentro de su propio partido. La distensión ha allanado el camino para que los principales operadores de la UNE en el Congreso fomenten vínculos mutuamente beneficiosos con el presidente y sus aliados.

El principal intermediario de la UNE en el Congreso durante este período ha sido Estuardo Vargas, quien hasta hace poco dirigía *la bancada del partido*. Vargas mantiene una relación amistosa con el principal asesor de Giammattei, Miguel Martínez, según dos diputados entrevistados por InSight Crime. El bloque de la UNE también tiene una gran influencia en las comisiones de trabajo de la legislatura, que deciden si una iniciativa legal propuesta llega o no al pleno del Congreso para su votación. Los representantes de la UNE ahora **encabezan** 11 de las 37 comisiones de trabajo, siete más que cualquier otro partido, lo que le da al bloque un importante poder de negociación en sectores estatales asociados con la corrupción, como vivienda, asuntos electorales, seguridad alimentaria, trabajo y la oficina que emite los documentos nacionales de identidad (conocida por sus siglas RENAP).

El control de los puertos

Vargas dirigió anteriormente el puerto estatal de Santo Tomás de Castilla, en Izabal, y se cree que, a día de hoy, entre sus contactos se encuentra el conocido empresario Axel Arturo Samayoa Camacho, alias “Castor”. Las múltiples empresas navieras de Samayoa han recibido millones de dólares en contratos estatales para prestar servicios cruciales de verificación de contenedores de transporte —incluida la videovigilancia— en los puertos estatales y privados de Guatemala. El Tesoro de Estados Unidos ha **sancionado** a Samayoa por “conspirar con funcionarios públicos y pagar sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran lucrativos contratos portuarios”.

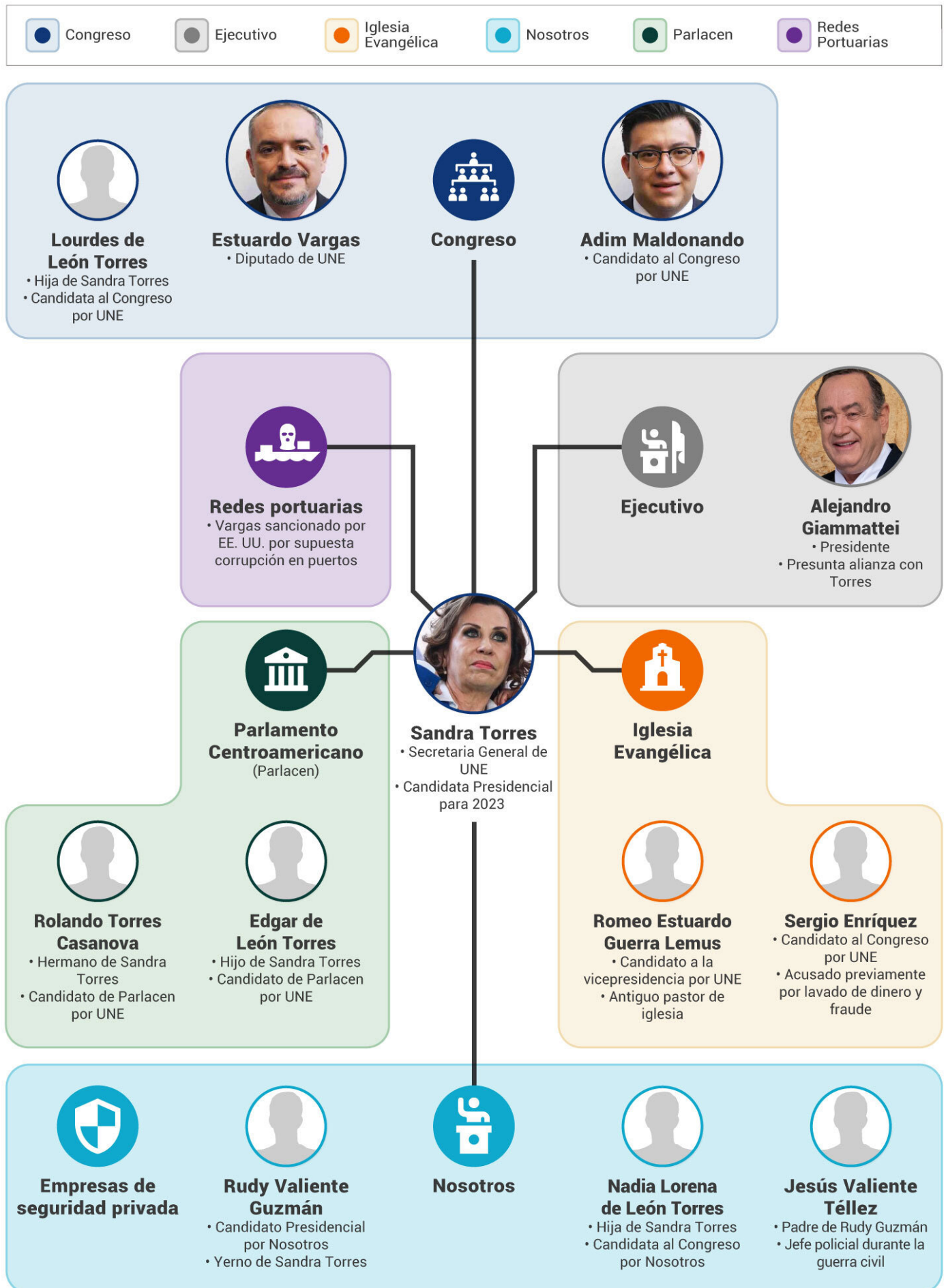
Los contactos en los puertos pueden **manipular** la infraestructura portuaria—incluidos los escáneres, las cámaras y el suministro eléctrico— para permitir que determinados contenedores de transporte, llenos de drogas o contrabando, pasen por los puertos sin control. La autoridad de Vargas en los puertos también se extiende a los contratos estatales y a los puestos de trabajo en el gobierno, que pueden aprovecharse para obtener beneficios personales y mejorar su posición política. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos **sancionó** a Vargas en 2022 por presunta corrupción, algo que parece haber hecho retroceder a Vargas, que no se presentará como candidato al Congreso en las próximas elecciones. En su lugar, aspira a un escaño en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Preparado para tomar el papel de Vargas está Ervin Adim Maldonado, un influyente operador del Congreso que se ha unido a las filas de la UNE para las elecciones de 2023. La familia de Maldonado es propietaria de una red de empresas de cable que **operan** en más de 200 municipios (dos de estas firmas recibieron contratos estatales del Tribunal Supremo Electoral, o TSE, para difundir material de campaña durante las elecciones de 2019). Las empresas permiten a la familia promover a determinados candidatos, una estrategia que sirve de inversión para poder asegurarse el poder en el Congreso.

Anteriormente, Maldonado fue diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el partido del expresidente Jimmy Morales. Ahora encabeza la lista de candidatos de la UNE al Congreso para las elecciones de junio. Si resulta elegido, probablemente encabezará la coalición parlamentaria del partido y, según las declaraciones de un diputado a InSight Crime, se convertirá en “el nuevo Vargas”.

UNE: Red Política

Este gráfico refleja una red de actores que apoya al Partido UNE.



Mayo 2023

Caciques, élites e iglesias evangélicas

Históricamente, La UNE se ha apoyado en una red de operadores regionales, también conocidos como *caciques*, para movilizar fondos para hacer campaña fuera de Ciudad de Guatemala. El enfoque de la UNE se remonta a la década de los 2000, cuando los operadores del partido supuestamente **establecieron vínculos** con caciques regionales y narcotraficantes —incluidos miembros de la organización narcotraficante mexicana Zetas— para financiar la campaña ganadora del expresidente Álvaro Colom (2008-2012). La viabilidad electoral del partido parece depender de su capacidad para entregar recursos estatales a estos caciques, a menudo miembros experimentados del Congreso o alcaldes prominentes, que buscan contratos y puestos en el gobierno como pago por financiar campañas políticas.

Los vínculos más visibles del bloque con las élites tradicionales se dan a través del yerno de Torres, Rudy Guzmán. Guzmán es candidato presidencial por el partido político Nosotros, registrado ante las autoridades electorales en 2022, entre cuyos candidatos al Congreso **figura** la hija de Torres —y esposa de Guzmán—, Nadia Lorena de León Torres. Guzmán es propietario de empresas de seguridad privada a las que se han adjudicado millones de dólares en contratos estatales y, al parecer, es el principal financiador de Nosotros, según la prensa local y fuentes entrevistadas por InSight Crime.

Otros miembros de la familia inmediata de Torres también forman parte del proyecto político, entre ellos su hija Lourdes de León Torres (candidata a diputada por la UNE) y su hijo Edgar de León Torres (candidato de la UNE al Parlacen).

La elección de Torres como compañero de lista, un ex pastor evangélico, representa un alejamiento de la postura ideológica de centroizquierda del partido. A primera vista, el objetivo parece ser ganarse a los votantes conservadores de la capital, donde la UNE ha obtenido históricamente malos resultados. Pero más allá de asegurar votos, la red de iglesias evangélicas puede ayudar a financiar la campaña electoral del partido. La alianza también llamó la atención porque las iglesias evangélicas han sido utilizadas para lavar dinero. Algunas fuentes señalaron a Sergio Enríquez, candidato al Congreso por la UNE, **acusado** anteriormente de lavado de dinero y fraude.

Protección judicial y supervivencia política

Las interacciones del bloque de la UNE con el sector judicial están orientadas principalmente a asegurar su propia supervivencia política en lugar de liderar el debilitamiento del edificio contra la impunidad del país. El bloque se ha beneficiado de sentencias judiciales favorables en casos de corrupción de alto perfil y parece haber aprovechado sus alianzas políticas para montar bloqueos legales destinados a sofocar las rebeliones internas del partido.

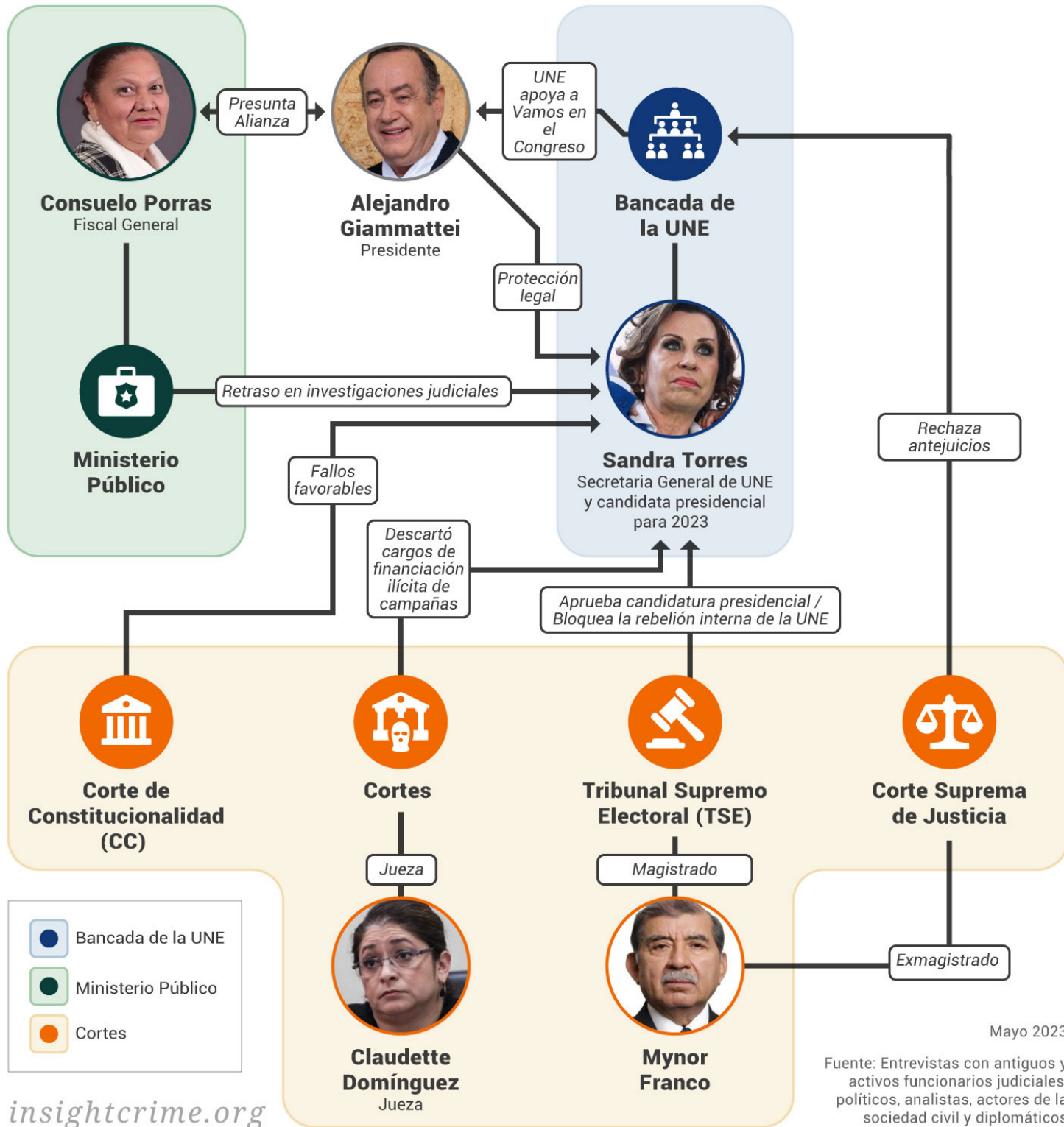
Intercambio de favores: Los tribunales, la Fiscalía General y el Congreso

La candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, ha estado en el centro de los esfuerzos de este bloque de poder político por conseguir protección judicial. La líder de la UNE fue encarcelada en septiembre de 2019 después de que la Comisión Nacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el ente judicial respaldado por las Naciones Unidas, la **acusara** de no reportar millones de dólares en contribuciones de campaña para las elecciones de 2015. Desde entonces se ha beneficiado de una serie de sentencias favorables. En enero de 2020, fue puesta bajo **arresto domiciliario**. En octubre de 2022, la jueza que envió a Torres a juicio, Claudette Domínguez, revocó una medida que le impedía hacer campaña política y le concedió la libertad condicional, facilitando su **regreso** a la vida política. Luego, un mes después, Domínguez archivó el caso contra Torres y la supuesta financiación ilícita de la campaña de la UNE, **liberando a Torres** de cargos penales pocas semanas antes de que se inscribiera como candidata presidencial para las elecciones de 2023.

Domínguez, que preside casos de corrupción de alto impacto en los tribunales penales de más alto nivel de Guatemala, ha **fallado** anteriormente a favor de élites militares y políticos de alto nivel acusados de corrupción. Y su decisión de archivar el caso de Torres se produjo pocas semanas después de que los votos de los diputados de la UNE **ayudaran** al bloque de Giammattei a lograr objetivos clave en el Congreso, incluida la reelección de la operadora de Giammattei en el partido Vamos, Shirley Rivera, como presidenta del Congreso y la **aprobación** de un presupuesto nacional reforzado para 2023. El precedente legal que se utilizó para justificar la decisión provino de la Corte de Constitucionalidad, que a finales de 2021 **dictaminó** por unanimidad que Torres no podía ser procesado por no registrar las contribuciones de campaña de 2015, ya que esto no era un delito según el código penal del país en el momento de la presunta infracción.

UNE: Red Judicial

Este gráfico reseña una red de funcionarios políticos y judiciales vinculados con el Bloque de la UNE.



La Fiscalía General también ha fallado a favor del bloque de la UNE. En 2019, la Fiscal General Porras **retrasó** la imposición de cargos adicionales, por parte de los fiscales, contra Torres por financiamiento ilícito de campaña, dándole tiempo para inscribirse como candidata presidencial y, por lo tanto, obtener inmunidad política, según un exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que más tarde acusó a Porras de abusar de su autoridad. Los fiscales no han apelado la decisión de archivar el caso de financiación ilícita de campaña contra ella.

TSE: Entrar en la papeleta electoral

Torres también se ha beneficiado de **sentencias favorables** del TSE, la máxima autoridad electoral del país. El TSE ordenó a la UNE restituir a Torres como líder tras una rebelión interna que amenazó su control del partido. Funcionarios de UNE alegaron que la decisión del TSE formaba parte de un pacto entre Giammattei y Torres para asegurar la reelección del entonces presidente del Congreso, Allan Rodríguez (Vamos). Desde la ruptura, algunos de los rebeldes han pasado a formar otro partido político (Voluntad, Oportunidad y Solidaridad - VOS), mientras que los restantes representantes de la UNE han tendido a votar en línea con la coalición del presidente.

El TSE y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también han **rechazado los recursos** que pretendían impedir que Torres se presentara como candidata presidencial en las elecciones de 2023 alegando que su compañero de fórmula era un ministro de la Iglesia (la Constitución guatemalteca prohíbe que los ministros se presenten a las elecciones). Algo que ha supuesto un cambio de suerte para Torres, ya que, en 2011, el TSE y la CSJ le **impidieron presentarse** a las elecciones, alegando la prohibición constitucional de que el cónyuge del actual presidente se presente a las elecciones.

Los magistrados de la CSJ también han protegido a otros funcionarios de la UNE de ser procesados. Por ejemplo, votaron en contra de un amparo de 2019 que buscaba despojar a Estuardo Vargas de su inmunidad parlamentaria y permitir que los fiscales lo investigaran por presunto financiamiento ilícito de campaña. Tal y como le declaró un diputado a InSight Crime, el principal contacto del bloque en el TSE parece ser Mynor Franco, uno de los cinco magistrados permanentes del tribunal. Anteriormente, Franco formó parte de la CSJ y, en 2011, fue el único magistrado que votó a favor de permitir que Torres se presentara como candidata.

6

Bloc III – Valor y el fantasma de los CIACS

Zury Ríos (Valor) encabeza constantemente las encuestas, lo que la convierte en una de las candidatas favoritas en una campaña repleta e impredecible. Parte de su atractivo reside en el reconocimiento. Es hija de Efraín Ríos Montt, el destacado general que tomó el poder en Guatemala en un golpe militar en 1982. Posteriormente fue Presidente del Congreso (1995-1996, 2000-2004). Su hijo se desempeñó como diputada de su partido político el último periodo, uno de los cuatro que ocupó. Ríos ha sido una abierta defensora de los derechos de la mujer, entre otras causas, y ha trabajado eficazmente al otro lado del pasillo para **impulsar** su agenda.

Pero también tiene vínculos con grupos religiosos y cívicos ultraconservadores nacionales e internacionales. Entre sus partidarios se encuentran antiguos militares vinculados a los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), una red criminal que durante mucho tiempo ha ejercido una influencia significativa en los organismos de seguridad e inteligencia del gobierno. También ha forjado una alianza con el Partido Unionista (PU), que tiene su propio legado de los CIACS y ha controlado Ciudad de Guatemala y sus negocios relacionados con el gobierno durante décadas. Además, se ha asegurado el apoyo de antiguos miembros del gobierno del expresidente Jimmy Morales y cuenta con importantes aliados sociales y políticos en los sectores provista de las iglesias católica y evangélica, así como con conexiones con el Opus Dei. Por último, tiene aliados en las altas cortes y un perro guardián judicial, Ricardo Méndez Ruiz, responsable de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), que la apoya desde hace años.

Tres pilares

La coalición de Ríos depende de tres pilares de apoyo, cada uno de los cuales tiene diferentes intereses empresariales que buscan proteger o expandir, además de bases de poder y objetivos diversos.

Pilar I: La vieja guardia

El primer pilar está formado por restos de la red de su padre, muchos de los cuales fueron miembros del partido político de su padre, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), en un momento u otro. Esto incluye a antiguos oficiales militares, representantes del Congreso y abogados destacados. Varias fuentes dijeron a InSight Crime, por ejemplo, que entre los exmilitares que apoyan a Ríos está Gustavo Adolfo Padilla, un excoronel que ahora ayuda a dirigir una empresa de seguridad privada que se ha beneficiado de **contratos** del gobierno.

La seguridad privada es uno de los principales tipos de negocio creados por exmilitares, y es uno de los grupos de presión más grandes de la capital, ya que tanto las agencias gubernamentales locales como las federales contratan con frecuencia a estas empresas para todo, desde guardaespaldas personales hasta cámaras de vigilancia o trabajo de detective privado. Es un negocio que también los sitúa en la encrucijada de muchos otros negocios y oportunidades de hacer dinero, donde la línea entre lo legal y lo ilegal se vuelve difusa.

En el caso de Padilla, su empresa, Serseco, habría **creado** “estructuras paramilitares” para ayudar a proteger proyectos hidroeléctricos de grupos opositores locales. En 2018, el propio Padilla fue relacionado con casos de corrupción, pero nunca fue acusado. La conexión de Padilla con Ríos es directa pero no está firmemente establecida. Su hijo, **Kenneth Müller**, dirige el departamento de videografía de Valor y ha **realizado** documentales revisionistas sobre la guerra de Guatemala. Pero algunas fuentes afirman que no está tan bien relacionado con los exmilitares como lo estuvo en el pasado.

Otras partes de la campaña no son militares, pero tienen las credenciales conservadoras y las conexiones históricas adecuadas. El equipo de comunicación de Valor, por ejemplo, incluye al costarricense Alfred Kaltschmitt, un influyente columnista de derecha, especialista en comunicación, decano universitario y propietario de Radio Infinita. **Kaltschmitt** trabajó con el gobierno de Ríos Montt en 1982- 1983, como parte del lado más suave del esfuerzo contrainsurgente en el Triángulo Ixil. Recientemente, Radio Infinita cortó lazos con Con Criterio, un programa popular de radio que ha criticado abiertamente los esfuerzos por socavar el sistema de justicia. Al parecer, Kaltschmitt tiene problemas de salud y es posible que no sea tan activo como antes.

Sin embargo, aunque su papel actual pueda estar limitado por su salud, Kaltschmitt ha sido durante mucho tiempo un **interlocutor** importante para Zury Ríos. Cuando la Fiscalía General procesó a Ríos Montt por genocidio en 2013, Kaltschmitt habría conseguido una audiencia de Ríos con numerosas élites económicas tradicionales. La reunión inició un proceso que acabó por suavizar algunas tensiones persistentes desde el gobierno del FRG de principios de la década de 2000, durante el cual el partido de Ríos Montt había denigrado a las élites y cortado sus intereses comerciales.

Posteriormente, algunas élites se unieron a los esfuerzos de Ríos para difamar el juicio del gobierno contra su padre, y Ríos mantiene muchas de esas relaciones. De hecho, algunos **medios** de comunicación han afirmado que está recibiendo financiación de prominentes familias con participaciones en importantes empresas vinculadas a la construcción, la agroindustria y las industrias extractivas, así como en los sectores de servicios y alimentos. Sin embargo, fuentes de InSight Crime aseguran que los esfuerzos de financiación pueden estar limitados para todos los candidatos después que se investigara a élites empresariales de alto perfil por presuntamente **contribuir** ilegalmente con fondos a la campaña electoral de Jimmy Morales en 2015.

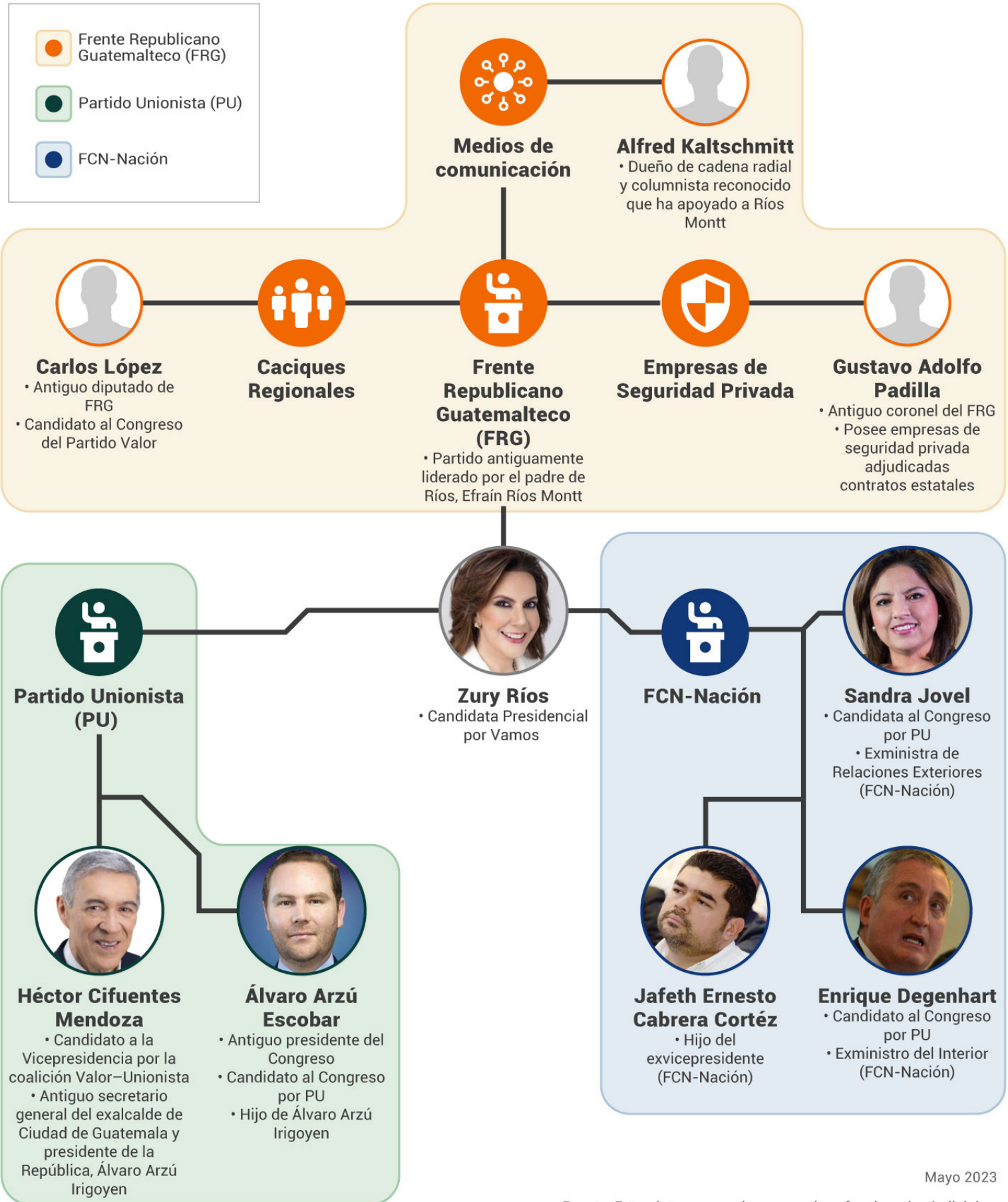
En las afueras de Ciudad de Guatemala hay varios antiguos caciques del FRG. Como se ha señalado en la sección sobre el bloque de la ex primera dama y candidata presidencial por el UNE, Sandra Torres, estos caciques desempeñan un papel clave en la captación de votos a nivel local a cambio de contratos gubernamentales a nivel nacional. Algunos de ellos ya han sido señalados por corrupción. Carlos López, por citar un ejemplo, fue diputado por el FRG y es candidato a diputado por Valor en Quiché. Cabe destacar que estuvo implicado en un **caso conocido** como *Plazas Fantasma*, llevado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el que se alegaba que diputados estaban creando decenas de empleos fantasmas. En 2022, un juez abandonó el caso.

Pilar II: Unionistas

El segundo pilar de Ríos es el Partido Unionista. Ambos partidos se aliaron oficialmente en 2022. Están alineados ideológicamente: ambos tienen plataformas conservadoras, temerosas de Dios y anticomunistas. Tienen una genealogía CIACS compartida. Un ejemplo de ello es el abogado Moisés Galindo, quien se hizo famoso por su ruidosa defensa hacia algunos de los militares acusados, entre ellos Ríos Montt durante su juicio por genocidio, además de Byron Lima, quien tenía **fuertes vínculos** con el expresidente y alcalde de Ciudad de Guatemala durante muchos años Álvaro Arzú y los CIACS.

Valor: Los 3 pilares de Ríos

Este gráfico enseña una red de actores que apoya al Partido Valor.



Mayo 2023

Fuente: Entrevistas con antiguos y activos funcionarios judiciales, políticos, analistas, actores de la sociedad civil y diplomáticos.

Es más, los unionistas han gobernado la ciudad de Guatemala durante dos décadas (antes bajo la bandera del Partido de Avanzada Nacional o PAN). El Partido Unionista ha controlado la Ciudad de Guatemala mediante una combinación de comités de base, medios de comunicación estratégicos y alianzas empresariales, además del *sótano*, un eufemismo para describir el elaborado aparato de inteligencia y contrainteligencia. Pero su control de la ciudad no está garantizado.

Para el Partido Unionista (PU), la alianza significaría el acceso a la presidencia y, si consiguen ganar Ciudad de Guatemala, continuar con el control de la ciudad. Sin duda, sus candidatos son conductos naturales entre los centros de poder de la ciudad y el gobierno central que entienden cómo funciona la política. El candidato a la vicepresidencia de Ríos, por ejemplo, es Héctor Cifuentes Mendoza, un unionista que fue secretario general de Álvaro Arzú en Ciudad de Guatemala durante años y que luego estuvo **implicado** en casos de corrupción durante la administración de Pérez Molina en un caso llamado Caja Pandora, según una investigación de 2019 del medio elPeriódico.

El PU también intenta posicionarse mejor en el Congreso. Uno de los candidatos es Álvaro Arzú Escobar, hijo del expresidente y alcalde Álvaro Arzú, y diputado en el Congreso desde hace muchos años. En 2017 **ayudó** a impulsar una legislación que prohibía el enjuiciamiento de legisladores por financiación ilícita de campañas. Luego asumió la presidencia del Congreso (2018-2020) y puso en marcha una “Comisión de la Verdad”, durante la cual las “víctimas” de la de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano judicial supranacional respaldado por las Naciones Unidas, podrían testificar, y también **fue parte** de una campaña para denigrar al entonces Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

Pilar III: FCN-Nación

Otros candidatos importantes del PU al Congreso son Enrique Degenhart, Sandra Jovel y Jafeth Ernesto Cabrera Cortez, quienes brindan un buen puente hacia el tercer pilar de la candidatura de Ríos: la administración del expresidente Jimmy Morales.

Degenhart es el segundo al mando del PU y exfuncionario de aduanas de nivel medio del gobierno del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), donde se labró una **reputación** de funcionario que luchaba contra el crimen. La realidad fue todo lo contrario. La Fiscalía General **investigó** a su hermano por lavado de dinero, y, como ministro del Interior de Morales, **socavó** sistemáticamente la CICIG, entre otras cosas, sacando a la policía de sus puestos y sustituyendo a los comandantes que trabajaban con la CICIG por otros que se oponían a su misión o que, al menos, estaban dispuestos a derrumbarla.

Al igual que Degenhart, Jovel trabajó en conjunto con la presidencia para aislar a la CICIG. Se aseguró de que el juez colombiano y entonces comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, no pudiera volver a entrar en el país una vez que Morales lo nombró persona no grata en 2017.

Cabrera Cortez puede ser el vínculo más cercano que tiene la campaña con el narcotráfico. En 2018, un narcotraficante que pronto será extraditado, y que a su vez fue militar, supuestamente **testificó** que Cabrera solicitó US\$1 millón para la campaña vicepresidencial de su padre en 2015.

La afinidad entre los bandos de Ríos y Morales se debe, en parte, a que comparten raíces e intereses. El partido de Morales, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), fue fundado por antiguos militares, incluidos varios que luego financiaron la candidatura de Morales a la presidencia y estuvieron **relacionados** con violaciones de los derechos humanos, actividades delictivas y corrupción.

Estos antiguos militares siguen interconectados en asuntos personales, sociales, empresariales y gubernamentales. Sus intereses incluyen el control de los grandes presupuestos del Ministerio del Interior, así como de nodos de poder cruciales en las aduanas y oficinas tributarias, para poder desplumar a empresas privadas y funcionarios públicos por igual.

Por su parte, Ríos no tiene reputación de corrupto, pero documentos filtrados del Departamento de Estado afirman que **asistió** a una reunión en la que ella y el partido político de su padre, el FRG, agradecieron personalmente a uno de los donantes corruptos de la campaña presidencial de Portillo. También es notable que durante mucho tiempo ha estado rodeada de numerosos operadores y políticos, incluido su actual **esposo**, que han saqueado el Estado o lo han reutilizado para sus propios fines, muchos de los cuales proceden del mismo mundo que ella. En los asuntos de justicia, sin embargo, Ríos ha demostrado una capacidad y voluntad de ser mucho más directa.

Poder político, impunidad y venganza judicial

Las interacciones de Ríos con el sistema judicial se han centrado en asegurar el acceso a los tribunales superiores del país como la Corte de Constitucionalidad (CC), donde sus aliados la han beneficiado a nivel personal y profesional. También cuenta con un poderoso aliado fuera del sistema judicial, que desempeña el doble papel de perro guardián de la impunidad y perro de ataque para aquellos que se sienten agraviados por los esfuerzos de la CICIG y sus aliados judiciales.

Cómo influir en las Comisiones de Postulación

Ríos comprendió hace tiempo que el sistema judicial era una herramienta fundamental del poder en Guatemala. A principios de la década de 2000, como parte del bloque legislativo más poderoso del Congreso, **votó a favor** de ampliar la participación de los miembros del Colegio de Abogados del país en la votación de los representantes de las llamadas Comisiones de Postulación. Las Comisiones de Postulación seleccionan a los candidatos definitivos para Fiscal General, las altas cortes del país y el Tribunal Supremo de Electoral (TSE), entre otros. El colegio de abogados selecciona hasta 11 miembros de cada comisión, por lo que la ampliación de la participación tuvo **consecuencias** amplias e inmediatas en la selección del Fiscal General y de estos jueces.

Uno de los impulsores y beneficiarios de esta nueva ley fue el entonces esposo de Ríos, Roberto López Villatoro. Apodado por los periodistas “el Rey del Tenis”, por los millones que había ganado con la venta de tenis de imitación importados del extranjero, López Villatoro pronto se posicionó como el promotor de facto y captador de votos del FRG en el Colegio de Abogados. El resultado fue un giro histórico en la justicia guatemalteca. Lo que antes era competencia de las élites económicas tradicionales del país ahora era un campo de batalla en el que el FRG, la UNE y otros representantes de la élite emergente, como López Villatoro, empezaron a **suministrar** sus propios jueces elegidos a dedo, además de funcionarios judiciales de alto nivel.

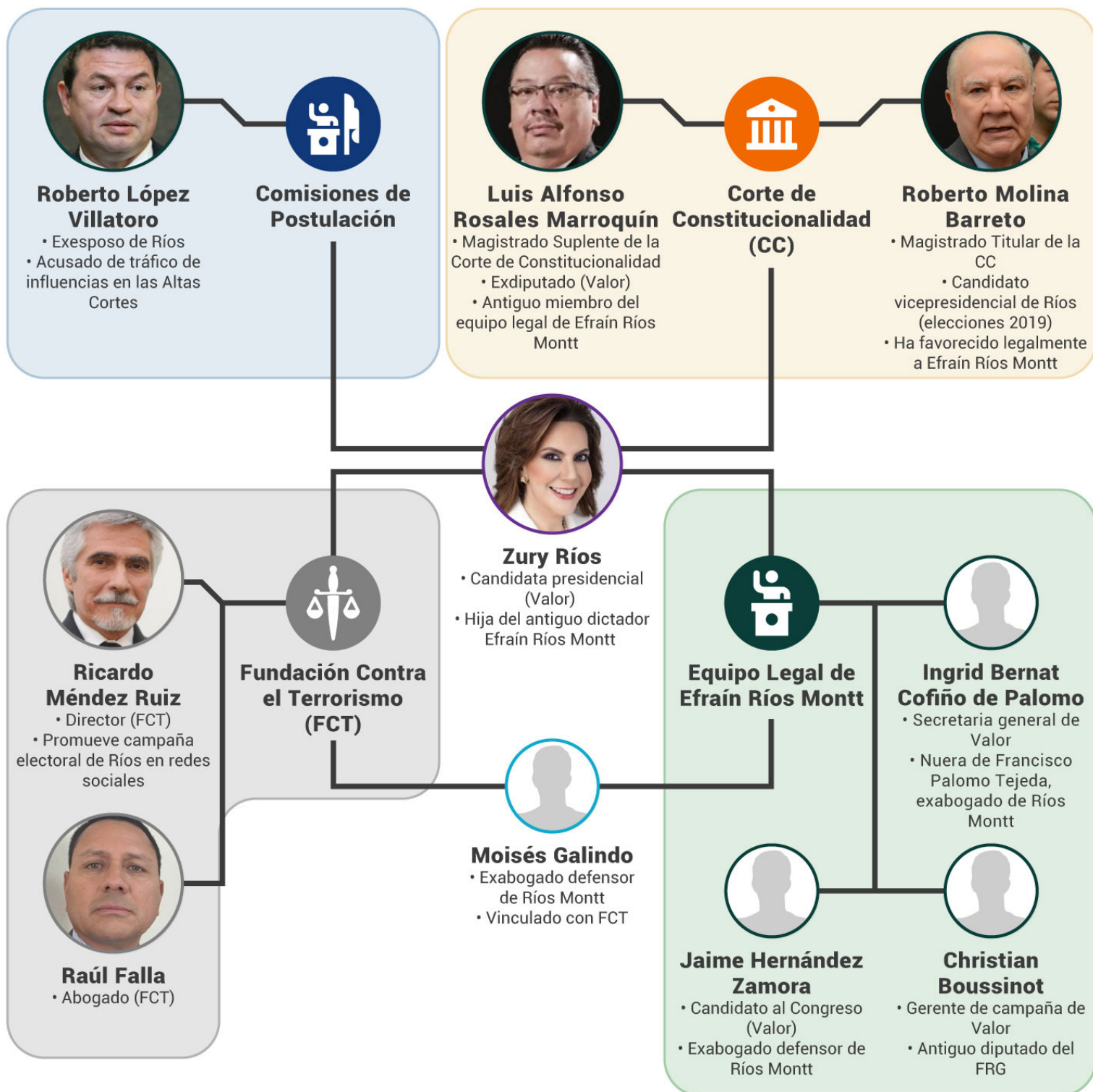
El apilamiento de los Tribunales Superiores

Este tipo de regateo ha resultado fundamental para Ríos tanto personal como políticamente. En 2013, después de que su padre, Ríos Montt, fuera condenado por genocidio por un tribunal especial guatemalteco, ella y sus cómplices recurrieron a la CC. Allí contaba con un fuerte aliado, Roberto Molina Barreto, magistrado del tribunal que inmediatamente fue autor del contraargumento que anuló la condena de Ríos Montt nueve días después del histórico fallo. Zury Ríos elegiría más tarde a Molina para ser su candidato a la vicepresidencia durante su campaña presidencial de 2019. Molina se ha desempeñado como magistrado titular y suplente de la CC desde 2006.

Además de Molina, en marzo de 2021, el Congreso seleccionó a Luis Alfonso Rosales Marroquín, un exdiputado de Valor que también trabajó en el equipo de defensa del padre de Ríos, para ser suplente en la CC. Estos aliados pueden haber jugado un papel clave en el cambio de su suerte política. Aunque la campaña de Ríos para 2019 se **detuvo** cuando la CC dictaminó que el artículo 186 de la Constitución de Guatemala prohibía a los parientes cercanos de los líderes golpistas ocupar la presidencia, su campaña para 2023 **recibió** luz verde por parte de un nuevo grupo de magistrados de la CC.

Valor: Red Judicial

Esta gráfica enseña una red de actores judiciales vinculados con el bloque Valor.



Mayo 2023

Fuente: Entrevistas con antiguos y activos funcionarios judiciales, políticos, analistas, actores de la sociedad civil y diplomáticos

Los tribunales también han fallado en contra de posibles rivales. A Thelma Cabrera, candidata a la presidencia por el izquierdista Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que quedó en cuarto lugar en las elecciones de 2019, se le prohibió postularse. El TSE **rechazó** por motivos técnicos la inscripción del candidato a vicepresidente del MLP y exdefensor del Pueblo, Jordán Rodas. La decisión excluyó automáticamente a Cabrera de la candidatura presidencial. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) y la CC **rechazaron** entonces los recursos presentados por el MLP.

El TSE también revocó la inscripción de otro posible rival, Roberto Arzú, el hijo descarriado de Álvaro Arzú. Las autoridades electorales habían dado luz verde a la participación de Arzú, pero luego **fallaron a favor** de una petición presentada por miembros de FCN-Nación con el objetivo de anular su candidatura por haber realizado campaña política antes del inicio oficial de las elecciones. Al igual que en el caso del MLP, la CC **rechazó** los recursos contra la resolución del TSE presentados por Arzú y su partido, Podemos.

La CC también ha **beneficiado** a Ríos en su propia carrera a la presidencia al rechazar un recurso legal que pretendía bloquear su candidatura. La impugnación se centraba en la misma prohibición constitucional que impide a los hijos de expresidentes que llegaron al poder mediante un golpe de Estado postularse a las elecciones presidenciales (como hizo su padre en 1982). La CC también **desestimó** un caso contra su candidato a vicepresidente, Héctor Cifuentes, quien enfrentaba cargos por financiación ilegal de la campaña.

El candidato presidencial Edmond Mulet, del partido Cabal, también fue puesto sobre aviso por el TSE luego que la Fiscalía General lo **acusara** de interferir en una investigación sobre un destacado periodista encarcelado por lavado de dinero. Ello se produjo después de que Mulet presentara sin éxito el recurso legal destinado a invalidar la candidatura de Ríos.

Mulet parece haber sobrevivido al periodo de requerimientos, peticiones y otros medios por los que se ha excluido a los candidatos. El 25 de mayo, fecha límite para la impresión de papeletas, Mulet estaba oficialmente en la carrera por la presidencia. Es más, parece estar bien posicionado para aprovecharse el caos. Los **últimos** sondeos lo sitúan en la segunda vuelta, junto con Sandra Torres.

En busca de venganza desde fuera

Los aliados de Ríos fuera del sistema de justicia formal pueden ser más fuertes que los del interior. Además de Moisés Galindo, Ríos cuenta con el apoyo de otros miembros del antiguo equipo jurídico de su padre, que incluye a Jaime Hernández Zamora.

Zamora defendió tanto al general en el caso del genocidio como a un actual jefe de campaña de Valor, Christian Boussinot, a su vez exdiputado implicado en el caso Plazas Fantasmas. La secretaria ejecutiva de Valor es Ingrid Bernat Cofiño de Palomo, nuera de Francisco Palomo Tejeda, quien formaba parte del equipo jurídico de Ríos Montt, antes de ser brutalmente asesinado a pocas cuadras de su oficina en Ciudad de Guatemala en circunstancias misteriosas.

Por su parte, Galindo es uno de los interlocutores de Ríos con la Fundación Contra el Terrorismo Guatemala (FCT). El director de FCT, Ricardo Méndez Ruiz, también tiene un linaje militar y una larga historia personal con Ríos que lo hace más leal a ella que cualquier otro candidato y lo ha dejado claro en las redes sociales. Además, la misión principal de la FCT, defender a exoficiales militares acusados de abusos contra los derechos humanos, se alineó perfectamente con aquellos que intentaban deshacer la represión del sistema de justicia contra la corrupción.

Desde 2011, Méndez Ruiz, y posteriormente la FCT una vez que se formalizó en 2013, han presentado denuncias formales ante el sistema judicial. Según la ley guatemalteca, los jueces pueden desestimar estas denuncias y, durante mucho tiempo, rechazaron de manera uniforme las denuncias formales de FCT. Pero tras el cambio en la composición de los tribunales y la salida de la CICIG del país en 2019, numerosas denuncias contra operadores judiciales que trabajaron con la CICIG han sido remitidas al Ministerio Público para su investigación.

El sistema también cuenta con válvulas de escape jurídicas y sociales. En el aspecto legal, cualquier persona que presente una denuncia que un fiscal rechace puede recurrir ante un juez, quien, tras encontrar causa, puede asignar el caso a otro fiscal. En el frente social, la FCT lanza campañas sostenidas para desacreditar al **acusado** a través de las redes sociales con su pequeño ejército de seguidores. A menudo, señala quién es la siguiente persona en ser blanco de sus ataques con algunas publicaciones en las redes sociales. Estos ataques son personales, persistentes y pueden tener un impacto devastador por sí solos, aunque no se abra ninguna investigación judicial.

La relación de Ríos con FCT y Méndez Ruiz podría convertirse en un problema. Méndez Ruiz, Galindo y un abogado de la FCT, Raúl Falla, han sido **incluidos** en la Lista Engel. Pero mientras estos actores permanezcan fuera del gobierno, ella puede mantenerlos a distancia incluso mientras se beneficia de los cócteles molotov de Twitter de Méndez Ruiz y la amenaza inminente de denuncias penales que pueden apuntar a rivales potenciales.

7

Bloc IV - Cabal: caciques y compromisos

Gracias a una combinación de suerte, persistencia y dudosos recursos legales interpuestos contra otros candidatos, Edmond Mulet y su partido político, Cabal, se encuentran en el precipicio del poder. Con investigaciones espurias y sentencias judiciales cuestionables que eliminan a una serie de aspirantes a la presidencia, la puerta al cargo más alto está ahora abierta para Mulet, el abogado convertido en político, diplomático y ahora en candidato presidencial.

El partido de Mulet, sin embargo, es más una alianza de conveniencia que un bloque. Cabal, fundado en 2022, alberga candidatos procedentes de otros 21 partidos. Muchos de los partidos tienen un pasado cuestionable, y muchos de los candidatos se han enfrentado a acusaciones de corrupción y otros delitos. Mulet promete un “nuevo comienzo”, pero la composición de su partido sugiere que cargará con el lastre del turbio pasado de Guatemala.

El candidato

Mulet suele ser descrito como un diplomático, pero su carrera política nacional se remonta a los años 80. De joven militó en el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), un violento grupo anticomunista que se refería a sí mismo como “el partido de la violencia organizada”. Como partido político, el MLN tiene sus raíces en 1954, con el derrocamiento del entonces presidente Jacobo Árbenz. El partido cogobernó con el alto mando del ejército hasta finales de la década de 1970, manteniendo el poder mediante una serie de elecciones fraudulentas.

Mulet formó parte de una facción disidente del MLN, que se orientó hacia la política de centro-derecha y acabó creando un partido rival, el Partido Nacional Renovador (PNR). El PNR participó en las elecciones de 1982, con la aprobación militar, en las que Mulet fue elegido diputado, pero esas elecciones fueron anuladas tras un golpe dirigido por la facción militar del general Efraín Ríos

Montt. A partir de entonces, Mulet se acercó cada vez más al centro ideológico y fue elegido como diputado por la Unión del Centro Nacional (UCN) durante la transición de Guatemala a la democracia en 1985.

Tras asegurar su reelección en 1990, Mulet se convirtió en Presidente del Congreso en 1991. En 1993, fue nombrado embajador de Guatemala en Washington por el Presidente Jorge Serrano Elías (1991-1993). Pero pocas semanas después del nombramiento de Mulet, Serrano organizó un autogolpe de Estado, intentando disolver el Congreso y concentrar el poder en sus manos.

Mulet reprendió públicamente el golpe, que finalmente fracasó. Los acontecimientos marcaron el final de la etapa de Mulet en el Congreso. En su lugar, se embarcó en una carrera diplomática, ejerciendo como embajador en Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea. Más tarde se **incorporó** a las Naciones Unidas como jefe de la Misión de Estabilización en Haití en 2006. Mulet permaneció en la ONU hasta finales de 2016, ejerciendo como jefe de gabinete del Secretario General y Subsecretario de Misiones de Mantenimiento de la Paz. Posteriormente fue **llamado** para dirigir un grupo de investigación sobre el uso de armas químicas en Siria.

Mulet regresó a la política guatemalteca en 2019, cuando se presentó a las elecciones presidenciales bajo la bandera del Partido Humanista de Guatemala (PHG). Aunque terminó tercero, **obtuvo casi 500.000 votos**, una hazaña considerable en el profundamente fragmentado sistema de partidos de Guatemala. Durante las primeras fases de las elecciones no parecía estar entre los favoritos, pero emergió del pelotón después de que una serie de sentencias e investigaciones descalificaran a sus rivales.

Ahora, parece estar bien posicionado para competir por un puesto en la segunda vuelta, debido, en parte, a los fuertes caciques regionales de su partido, algunos con vínculos históricos con la corrupción en el partido. Además, el propio Mulet ha tenido sus propios problemas legales. A continuación, esbozamos algunas de las facetas más problemáticas del bloque Cabal, que han llevado a la prensa local a preguntarse si Mulet puede escapar de la “**vieja política**” guatemalteca.

Una coalición frágil y muchas alertas rojas

Cabal ha formado una **sólida coalición** de candidatos en todo el país, aunque las filas del partido son más numerosas en el oeste de Guatemala. Muchos candidatos son políticos experimentados que han ocupado cargos públicos como alcaldes o en el Congreso. Algunos de los principales candidatos de Cabal también tienen experiencia en el gobierno, como su compañero de candidatura, Max Santa Cruz, que fue **asesor principal** del ex vicepresidente

Eduardo Stein. A mediados de la década de 2000, Stein encabezó los esfuerzos para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano judicial supranacional respaldado por la ONU, que dirigió la lucha contra la impunidad durante una década.

Mulet apoyó a la CICIG durante su campaña electoral de 2019 y tiene profundos vínculos con las Naciones Unidas, que respaldaron a la comisión. Pero desde entonces ha cambiado de táctica: “CICIG nunca más en Guatemala”, [tuiteó](#) en mayo, y en un video adjunto agregó: “CICIG es el pasado”. El cambio está íntimamente relacionado con la forma en que se percibe el apoyo a la comisión en Guatemala. Lo que una vez fue una insignia de honor se ha convertido en un lastre político, en gran parte debido a la casi permanente campaña de publicidad de los enemigos de la CICIG.

Pero el cambio también forma parte del enfoque pragmático de Mulet hacia la política y las elecciones. Parece entender los equilibrios necesarios en la política guatemalteca para alcanzar el poder, algo que queda muy claro en la lista de candidatos de su partido. Cabal está formado por numerosos vástagos y presuntos delincuentes de partidos con liderazgos problemáticos.

Entre los partidos más notables que [figuran](#) en la lista de candidatos presentada por Cabal están sus rivales presidenciales: la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Sandra Torres (27) y Valor de Zury Ríos (1). Otros partidos, algunos de los cuales se han disuelto o se han enfrentado a acusaciones de corrupción generalizada, también llenan las listas de candidatos de Cabal, entre ellos Vamos (2), PU (4), FCN-Nación (2), Partido Patriota (12), Líder (10) y el FRG (8).

Uno de sus principales asesores fue [ministro de Salud](#) durante la administración de Otto Pérez Molina, que terminó en desgracia cuando la CICIG y la Fiscalía General presentaron acusaciones de corrupción contra Pérez Molina, y este renunció. Otro de los principales candidatos al Congreso fue ministro de Finanzas del entonces presidente Jimmy Morales, de quien la CICIG y la Fiscalía General dijeron que financió ilegalmente su elección de 2015. Otro candidato a diputado fue [asesor](#) de Allan Rodríguez, expresidente del Congreso (Vamos) sancionado por el gobierno de Estados Unidos.

Con tantos partidos de la “vieja guardia” en el trasfondo, quizá no sea sorprendente que la lista de Cabal esté repleta de candidatos a alcaldes y diputados, así como de asesores políticos, que han enfrentado acusaciones de corrupción y otros delitos. Algunos han sido encarcelados, entre ellos Mulet. Un asesor y un candidato al Congreso fueron [investigados](#) por la CICIG en el caso conocido como las Plazas Fantasma; otro asesor fue [nombrado](#) en una investigación de la CICIG sobre la compra de votos en el Congreso. Un candidato a diputado de Cabal fue [señalado](#) por conflicto de intereses en 2017 por haber sido beneficiario de un contrato gubernamental mientras servía en la legislatura por un partido diferente. Varios candidatos a alcaldes

fueron **investigados** por abuso de poder, violencia doméstica y otros delitos. La mayoría de estos casos fueron desestimados, archivados o los acusados exonerados, en muchos casos tras la salida de la CICIG y durante el proceso de desmantelamiento del sistema de justicia.

El caso de Mulet fue particular. Fue **detenido** brevemente a principios de la década de 1980 por supuestamente ayudar a facilitar adopciones ilegales. Quedó en libertad rápidamente y niega enérgicamente haber cometido delito alguno. Es más, Mulet no parece estar implicado en las tramas de corrupción actuales.

Su condición de persona ajena al sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Una ventaja es que podría intentar derribar el sistema. En una **entrevista**, por ejemplo, insinuó que destituiría a la controversial Fiscal General, Consuelo Porras, en caso de ser elegido. Y aunque ha evitado a la CICIG, ha hecho de la lucha contra la corrupción un elemento central de su campaña.

La desventaja es que tendrá que pactar con alguna combinación de los otros bloques políticos para poder gobernar. Así lo admitió en una **entrevista** concedida a Plaza Pública. “Para ganar votos, en Guatemala, hay que reconocer que hay caciques y si ese cacique no está con uno ese cacique está en contra”, dijo. “Me ha tocado hablar con caciques para pedir ayuda. Si esos caciques no están con uno, se van con otros y no ganamos las elecciones”.

Es posible que Mulet haya tenido que hacer acuerdos similares para conseguir apoyo financiero para su campaña. Entre sus supuestos financiadores se encuentran algunos de esos caciques. Entre ellos se destaca **Tomás Córdova**, quien aspira a la reelección al Congreso con Cabal y cuya familia es propietaria de una serie de **empresas constructoras y gasolineras** en el departamento de Alta Verapaz. Muchas de estas empresas han **recibido** contratos del gobierno en los últimos años. Además, está Julio López Villatoro, quien también busca la reelección en el Congreso, y cuyo hermano, Roberto, ha ayudado durante mucho tiempo a **diseñar** las comisiones de postulación y, por extensión, el sistema judicial. Pero además del apoyo que ha obtenido reclutando a importantes caciques, algunas fuentes afirman que Mulet también está cortejando a las élites tradicionales que lo ven como un socio más viable e ideológicamente afín que Sandra Torres, con quien muchos creen que se enfrentará en la segunda vuelta.

8

Prosperidad Ciudadana - el comodín se une al statu quo

Hay pocos ejemplos mejores de la batalla por el control del Estado guatemalteco que la candidatura de Carlos Pineda Sosa, quien fue descalificado de las elecciones semanas después de encabezar las encuestas. Su ascenso y posterior declive, y el de su partido político, permiten observar el poder de las élites emergentes en la periferia, y la capacidad de ciertos actores para obstaculizar a cualquiera que no se ajuste a sus reglas.

La aparición de Pineda como candidato presidencial en las elecciones de Guatemala de 2023 tomó por sorpresa a la mayoría, incluida la clase dirigente. Pineda, un novato político y empresario de la élite emergente con una popularidad derivada de su retórica antiestablecimiento y un considerable número de seguidores en las redes sociales, no tenía vínculos claros con la alianza que orbitaba alrededor de la administración Giammattei ni con las élites del sector privado. Su repentina llegada hizo saltar las alarmas entre los bloques políticos que temían que su elección pudiera alterar la sincronización del poder entre ramas claves del Estado. Más tarde, los tribunales lo eliminaron a él y a su partido de las elecciones.

Pero aunque Pineda pudiera ser ajeno, no puede decirse lo mismo de su partido, Prosperidad Ciudadana (PC). La lista electoral del PC estaba repleta de candidatos con dudosos vínculos con intereses corruptos y el submundo del narcotráfico. También había indicios de que destacados miembros del bloque más influyente de Vamos del presidente Alejandro Giammattei tenían intereses en Prosperidad Ciudadana.

Carlos Pineda: un comodín

Carlos Pineda se diferenci6 de los dem6s candidatos presidenciales en la medida que su candidatura fue autosuficiente. Su campa1a fue impulsada por su inmensa popularidad en redes sociales en vez de una campa1a tradicional —al momento de publicaci6n de este informe, Pineda tena m6s de un mill6n de seguidores en [TikTok](#), superando a todos los dem6s candidatos. Tambi6n parecfa ser econ6micamente autosuficiente gracias a una considerable fortuna personal procedente de las haza1as comerciales de su familia.

El abultado capital financiero de Pineda proviene de un conglomerado regional de empresas de transporte, log6stica portuaria, agricultura y compa1as de gasolina, operadas por la familia Pineda desde su base en el noreste de Guatemala. La fortuna de Pineda no era ning6n secreto, y parecfa ser parte de su atractivo. Su ascenso en las redes sociales se debi6 en parte a los v6deos virales que [documentaban](#) sus esfuerzos por distribuir ayuda a las v6ctimas de los huracanes utilizando un helic6ptero personal en 2020.

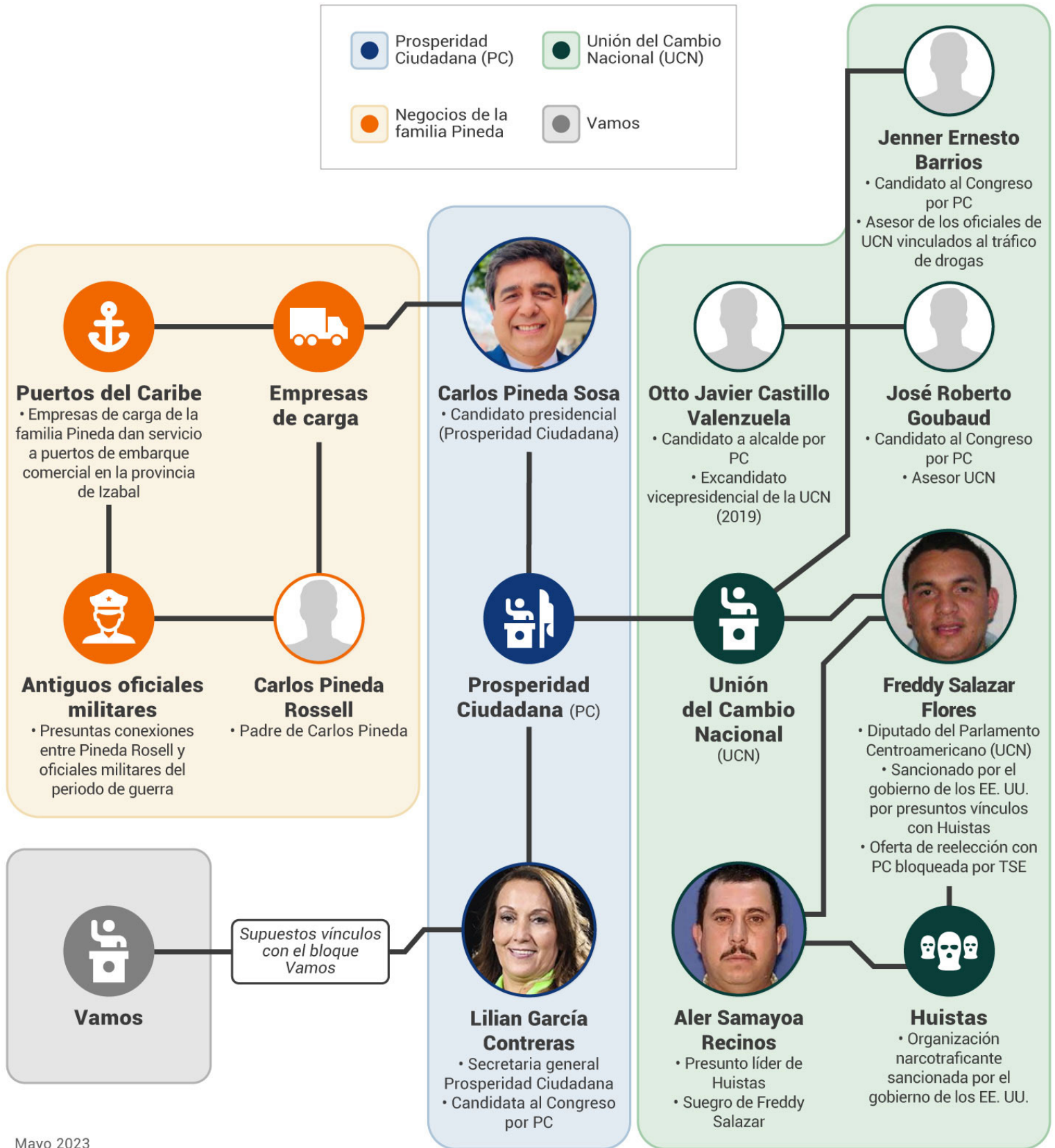
Los or6genes de la riqueza de la familia se remontan al padre de Pineda, Carlos Ren6 Pineda Rossell. Pineda Rossell [afirma](#) haber formado parte del equipo de seguridad de un comandante militar llamado Carlos Manuel Arana Osorio, que tena su base principal en la provincia oriental de Zacapa durante la guerra civil guatemalteca. Arana Osorio, conocido como el “Chacal del Oriente” por sus brutales haza1as durante la guerra, lleg6 a la presidencia en 1970 y [nombr6](#) a Pineda Rossell miembro de la prestigiosa guardia presidencial.

Estas conexiones en tiempos de guerra supusieron un trampol6n para Pineda Rossell. Cre6 una empresa de transportes, [Transportes Pineda Rossell](#), que durante mucho tiempo ha transportado bananos y otros productos para exportadores de fruta estadounidenses, como United Fruit Company y Del Monte. En la actualidad, el conglomerado familiar se ha diversificado y expandido por Centroam6rica y M6xico, sustentando la riqueza de la familia y proporcionando una amplia flota de camiones capaces de transportar diversos tipos de productos por toda la regi6n.

Los aliados pol6ticos de Pineda, pasados y presentes, plantean interrogantes. Antes de convertirse en el candidato presidencial del PC, Pineda iba a presentarse a las elecciones presidenciales con Cambio, un partido formado en 2022 por los hijos del ex candidato presidencial y condenado por lavado de dinero, Manuel Baldiz6n. Cambio tambi6n se convirti6 en un veh6culo para otros candidatos sospechosos, entre ellos Esduin Javier Javier, alias “[Tres Kiebres](#)”, un alcalde y ahora candidato al Congreso a quien las autoridades guatemaltecas han [vinculado](#) con el narcotr6fico. Pineda abandon6 el partido en enero, despu6s de que Baldiz6n regresara a Guatemala y supuestamente intentara imponer su autoridad en el partido.

Carlos Pineda: Red política

Esta gráfica refleja una red de actores vinculados al candidato presidencial del Partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda Sosa.



Mayo 2023

Fuente: Entrevistas con antiguos y activos funcionarios judiciales, políticos, analistas, actores de la sociedad civil y diplomáticos

insightcrime.org

A pesar de su salida de Cambio, la candidatura de Pineda por el PC podría haber proporcionado una vía de acceso al poder a actores vinculados al narcotráfico. Al igual que el partido Vamos del presidente Alejandro Giammattei, un notable contingente del ahora desaparecido partido Unión del Cambio Nacional (UCN) –anteriormente **tildado** de narcopartido por el gobierno estadounidense– gravitó hacia Prosperidad Ciudadana. La UCN también constituyó un pilar clave de apoyo a Vamos en el Congreso durante el gobierno de Giammattei.

Entre los funcionarios destacados de UCN con Prosperidad Ciudadana se encontraba Freddy Salazar Flores, miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen) que fue **sancionado** en 2022 por Estados Unidos por “transportar y almacenar cocaína” para una red de narcotraficantes guatemaltecos llamada los Huistas. La candidatura de Salazar a la reelección con Prosperidad Ciudadana fue rechazada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En su lugar, su madre y su esposa ocuparon los dos primeros puestos de la lista de candidatos del PC al Parlacen. La esposa de Salazar, Danury Lizeth Samayoa Montejo, es hija del presunto líder de los Huistas, Aler Samayoa, uno de los narcotraficantes guatemaltecos de más alto perfil buscados por Estados Unidos. La hermana de Salazar, Elisa Judith Mejía Salazar de Rozotto, está **casada** con otro presunto líder de los Huistas, Juan Bautista Rozotto López, y se presentó como candidata al Congreso por Prosperidad Ciudadana.

Otros candidatos al Congreso de Prosperidad Ciudadana **vinculados** al partido fueron José Roberto Goubaud, asesor de UCN y exdirector del mayor puerto comercial de Guatemala, Puerto Quetzal. También estaba Jenner Ernesto Barrios, candidato del PC al Congreso y antiguo asesor de Vivian Preciado Navarizo, diputada de la UCN cuya familia está fuertemente **vinculada** al narcotráfico en la costa Pacífica del país.

Pineda también podría haber tenido vínculos con la UCN. Antes de las elecciones de 2019, informes de la prensa guatemalteca **sugirieron** que se presentaría como candidato vicepresidencial del partido. Pero esto nunca se hizo oficial, y Pineda negó el vínculo. Durante esa campaña, el candidato presidencial de UCN, Mario Estrada, fue detenido por las autoridades estadounidenses bajo sospecha de narcotráfico y posteriormente se **declaró** culpable de conspirar con el Cartel de Sinaloa de México para traficar drogas utilizando la infraestructura estatal guatemalteca. El compañero de fórmula de Estrada en esa campaña, Otto Javier Castillo Valenzuela, también se unió a Prosperidad Ciudadana como candidato a la alcaldía de Villa Nueva, uno de los municipios más grandes y codiciados de Guatemala, con un abundante presupuesto municipal.

El comodín se encuentra con el statu quo

Desde el principio, la relativa independencia financiera y política de Pineda representó una amenaza para el statu quo. Aunque los orígenes precisos de la riqueza de Pineda son confusos, parecía tener capital más que suficiente para rechazar contribuciones privadas a su campaña y evitar pactos electorales por la puerta de atrás que suelen comprometer a los presidentes una vez en el poder.

Las tensiones se vieron mitigadas en cierta medida por la presencia de la secretaria general del PC y candidata al Congreso, Lilian García Contreras. Antes de unirse a Prosperidad Ciudadana, García Contreras fue diputada por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en Alta Verapaz, que ha trabajado estrechamente con el bloque de Vamos en el Congreso y en la presidencia.

La proximidad de García Contreras a los círculos gubernamentales sugería que el bloque del partido en el Congreso podría permanecer leal a la clase dirigente a pesar de la retórica antiestablecimiento de Pineda. Al principio, parecía un gana-gana. Los funcionarios del PC, incluida García Contreras, parecían haber visto la oportunidad de llegar al poder a través de Pineda. Y aunque Pineda tenía poco control sobre sus candidatos al Congreso, disponía de un vehículo con el cual llegar a la presidencia.

No obstante, surgieron tensiones. Aunque el PC parecía estar conectado con los círculos oficiales de poder, Pineda seguía siendo un comodín. En otras palabras, una presidencia de Pineda significaba una posible reconfiguración del statu quo, que otorgaría a un nuevo bloque de poder el control del Ejecutivo y de sus numerosos botines políticos y financieros, al tiempo que debilitaría la influencia de la clase dirigente.

A principios de mayo, y mientras Pineda se disparaba en las encuestas, el antiguo partido de Pineda, Cambio, **presentó** un requerimiento judicial alegando irregularidades en una de las asambleas preelectorales de Prosperidad Ciudadana, celebrada a finales de 2022, con el fin de hundir la campaña del partido. Y el 19 de mayo, un tribunal administrativo **suspendió** provisionalmente la candidatura de Pineda, así como la de todos los candidatos del PC. Pineda y Prosperidad Ciudadana presentaron recursos de apelación por separado ante la Corte de Constitucionalidad con la esperanza de revocar la decisión del tribunal administrativo. Pero pocos días después, García Contreras retiró el recurso de apelación del PC, dejando a Pineda solo.

El 26 de mayo, la Corte de Constitucionalidad **denegó** el recurso de Pineda, excluyéndolo oficialmente de las elecciones.



Metodología

El objetivo de este proyecto es mapear la actual configuración de los bloques de poder político en Guatemala en vísperas de las elecciones generales de junio de 2023, con especial énfasis en cómo dichas redes manipulan y socavan el sector judicial del país. Con este fin, centramos nuestro análisis en cuatro de los bloques más prominentes en la contienda electoral, cuyas actividades corruptas ejemplifican dinámicas de poder más generalizadas en los ámbitos político y judicial.

Para llevar a cabo esta investigación, InSight Crime creó un equipo conformado por un coordinador de proyecto y un investigador en Ciudad de Guatemala, un investigador del proyecto en Ciudad de México y un director de proyecto en Washington D. C. En conjunto, el equipo suma más de 50 años de experiencia en la investigación del crimen organizado y la corrupción en Guatemala.

El equipo empezó revisando con atención la información de fuentes de acceso público, como artículos de prensa, informes académicos y de políticas y expedientes judiciales, entre otros, para tener una idea general de los principales bloques de poder político en el país y de los candidatos electorales más destacados. Pudimos basarnos en una mina de reportajes anteriores de InSight Crime de varias décadas. Como organización, InSight Crime lleva más de 13 años investigando el crimen organizado y la corrupción en Guatemala.

El equipo también completó una ronda inicial de entrevistas cualitativas desde nuestros respectivos lugares de residencia. Con base en nuestros hallazgos iniciales, pudimos identificar tres bloques políticos con influencia desmesurada en la política, los temas judiciales y las elecciones: Vamos, UNE y Valor. Estos bloques no son exhaustivos, considerando la profundidad de la corrupción en Guatemala, pero el amplio alcance de sus partidarios y sus actividades al margen de la ley permiten un análisis amplio de la corrupción y la impunidad sistémicas entre las élites. Más adelante, cuando Mulet se erigió como un contendor presidencial más viable, añadimos a Cabal a la lista de bloques.

Luego de definir los parámetros de nuestra investigación, el equipo realizó una segunda ronda de entrevistas cualitativas, que incluyó un viaje de campo de una semana a Guatemala. En total, realizamos más de 65 entrevistas con una amplia variedad de fuentes, incluidos analistas políticos, funcionarios de gobierno, fiscales (contando a funcionarios de la FECCI y la CICIG), jueces, actores del sector privado, representantes de la sociedad civil, abogados defensores y fuentes diplomáticas.

La distribución geográfica del equipo nos permitió acceso a actores claves en Guatemala, así como en México y Estados Unidos, donde se encuentran residiendo muchos operadores judiciales en el exilio. En la medida de lo posible, calificamos las fuentes en el informe para permitir una mejor valoración de la autenticidad de la información suministrada. La mayoría de las fuentes solicitaron que se mantuviera su anonimato por motivos legales o de seguridad. Buscamos corroborar las declaraciones de todos los entrevistados con otras fuentes de información y entrevistas.

Con base en nuestra investigación, dividimos el informe en cuatro secciones principales. La primera incluye un resumen ejecutivo y los principales hallazgos, que contiene una sinopsis de las dinámicas claves en relación con la actual situación de corrupción e impunidad en Guatemala. La segunda sección ofrece un contexto histórico que ayuda a explicar las raíces de la corrupción en Guatemala y los orígenes de los principales bloques analizados en el informe.

La tercera y cuarta secciones del informe. Incluye un análisis detallado de los cuatro mayores bloques de poder político seleccionados para este estudio, y se exploran sus operaciones y esfuerzos por socavar el sector judicial. Hemos usado software de mapeo para ilustrar las conexiones entre los distintos bloques y las redes más amplias, como se ve en las gráficas que se encuentran en el informe. Para profundizar nuestro análisis, también realizamos un estudio de caso que ilustra cómo esos grandes bloques se valen de su capital político para ejercer influencia en las elecciones sacar de la contienda a los candidatos presidenciales no alineados.

Contenido relacionado

Conozca más sobre el cubrimiento a fondo de InSight Crime sobre la corrupción y la impunidad en Guatemala. En los últimos años, hemos documentado cómo las élites criminales-corrumpidas han estrechado el cerco sobre entes claves del Estado, en detrimento del Estado de derecho.



La impunidad empaña las elecciones en Guatemala

GUATEMALA / 19 JUN 2023

Vistas desde afuera, las elecciones generales del 25 de junio en Guatemala cumplen con los requisitos formales para ser consideradas libres y justas...

[LEA AQUÍ >](#)



Élites de Guatemala se fortalecen tras eliminar al principal candidato presidencial

ÉLITES Y CRIMEN / 26 MAY 2023

El candidato que lidera en la contienda electoral de Guatemala ha sido eliminado por...

[LEA AQUÍ >](#)



Por encima del clamor público, Guatemala sigue demoliendo iniciativas anticorrupción

ÉLITES Y CRIMEN / 25 JUL 2021

La destitución de Juan Francisco Sandoval, importante fiscal anticorrupción...

[LEA AQUÍ >](#)



InSight Crime es una organización sin ánimo de lucro dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en América Latina y el Caribe: el crimen organizado. Durante una década, InSight Crime ha cruzado fronteras e instituciones — como una amalgama de medio periodístico, centro de pensamiento y recurso académico — con el fin de profundizar y orientar el debate sobre el crimen organizado en el continente americano. Los reportajes en terreno, la investigación minuciosa y las investigaciones de alto impacto han sido características distintivas de la organización desde sus inicios.

Para más información, visite es.insightcrime.org